





# El Estado de Sitio y Los Gobiernos de Provincia

Recurso de habeas corpus en favor de los  
Doctores Rodolfo Games, Luis C. Caggiano, Jose  
Valido Marti y señores Ricardo F. Berri, Edgardo  
P. Iturria y Juan Abella.

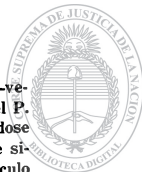
BIBLIOTECA DE LA CORTE	
Nº 1	10372
EDICIÓN	1ª
FICHA BIBLIOTECARIA	

LA PLATA

1933



## A MANERA DE PROLOGO

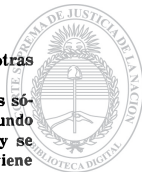


La detención de varios ciudadanos argentinos —vecinos de la ciudad de La Plata— ordenada por el P. E. de la Provincia de Buenos Aires, amparándose erróneamente en las disposiciones del “estado de sitio” y haciendo suyas las facultades que el artículo 23 de la Constitución Nacional confiere exclusivamente al Presidente de la Nación, motivó la presentación de un recurso de habeas corpus, que el subscrito interpuso en favor de aquellos.

El caso se planteó, creo por vez primera, ante los estrados judiciales. Intervino el Sr. Juez del Crimen de La Plata, Dr. Pedro J. Alegre, magistrado que sostuvo en un interesante fallo, la tesis favorable a la doctrina adoptada por el P. E. provincial, que era, contraria a la expuesta en el recurso. La Excma. Cámara 2ª de Apelaciones de Mercedes, tribunal que debió conocer por razones de feria judicial, mantuvo por “sus fundamentos” la resolución de primera Instancia.

Contra esa sentencia interpuso recurso extraordinario de apelación para ante la Suprema Corte de la Nación, recurso que hasta la fecha previas algunas incidencias judiciales planteadas y entre ellas la de apelación denegada, está todavía por resolverse, no obstante la naturaleza sumarísima del juicio instaurado, que lo fué... el día 17 de Enero de 1933.

Explicados estos antecedentes, cabe recordar, que mientras el recurso iba corriendo de tribunal en tribunal, uno de aquellos detenidos que es al mismo tiempo un prestigioso jurisconsulto del foro local, el Dr. Rodolfo Games, había obtenido su libertad, y que, lograda aquella, interponía a su vez ante la jus-



ticia federal un luminoso recurso en favor de otras personas igual y arbitrariamente detenidas.

La doctrina era la misma, pero claro está, más sólida e inteligentemente desarrollada. Este segundo recurso siguió a través de todas las instancias y se vió coronado con el más honroso triunfo que viene a ratificar así, por un lado, la verdad constitucional, y por el otro, la sapiencia del citado letrado.

Ahora bien: la circunstancia casual de haber precedido mi trabajo en algunos días al que justamente ha merecido los honores del éxito, ha creado una ligera confusión, en cuanto se ha corrido la versión, de que el pronunciamiento de la Corte Nacional había recaído sobre mi recurso. Y como eso no es exacto, ni es lícito quitar al César lo que es del César, he decidido reunir en este folleto, los únicos escritos y resoluciones recaídas, tal cual se encuentran en el expediente que yo iniciara. Se verá así que la Corte, hasta este momento, no se ha pronunciado sobre la libertad de los ciudadanos que reclamé judicialmente hace más de dos meses.

La Plata, Marzo 30 de 1933.

*Luis R. Longhi*

Señor Juez del Crimen:

El letrado que suscribe, Luis Ricardo Longhi, constituyendo domicilio legal en la calle 58 N° 637 bis, a V. S. digo:

Que vengo a interponer recurso de HABEAS CORPUS en favor de los Sres. Dr. Luis C. Caggiano, Edgardo P. Iturria, Ricardo F. Berri, Dr. Rodolfo Games, Dr. José Valido Martí y Juan Abella, que se encuentran detenidos sin causa legal para ello, en la Penitenciaría de esta Capital.

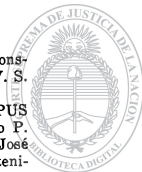
## I

Si ningún bien humano es de tanta magnitud como la libertad individual, todo esfuerzo tendiente a asegurarla o reintegrarla en su goce, no podrá jamás ser arguido de excesivo, por su forma o por su fondo, cuando puesto al servicio de ese precioso don natural que viene de la Creación misma, excogita todos los medios conducentes a coronar sus desvelos.

No ha de extrañar entonces a V. S., ni la extensión ni las ideas que se sostienen en este recurso. En lo que a la interpretación de la ley se refiere, podré estar equivocado pero en tal supuesto, el error no ha de ser calificado de intencional, si V. S. se digna tener presente que la inteligencia de la ley se ensancha y abre nuevos derroteros, a medida que ella se expurga en procura de la suprema felicidad. Y en cuanto a la extensión de este recurso, agregó que, si excede a lo que es de práctica en el procedimiento corriente, nunca será mucho ni bastante cuando lleva enhiesta en su asta, la bandera de las libertades humanas. Más aún, y no obstante V. S. pueda suponer paradójica la afirmación frente a la extensión del texto, podría concluir diciendo, que solo la premura del tiempo y quizá la insuficiencia de mejores dotes, han obligado a que se estrechen las proporciones del presente recurso.

## II

La instrucción policial, abocada al conocimiento de una tentativa local de delito común, ha procedido a la detención de un número de vecinos de esta capital, entre ellos





los que motivan este recurso de amparo. Con posterioridad a sus detenciones la misma autoridad policial no encuentra mérito suficiente para mantener privados de su libertad a la casi totalidad de los arrestados, incluso las personas citadas, pero en atención al estado de sitio vigente, resuelve no decretar las libertades que corresponden **DEJANDO A AQUELLOS A LA ORDEN DEL GOBIERNO.**

Interpuesto recurso de habeas corpus a favor de algunos detenidos en esas condiciones, V. S. cumpliendo las disposiciones del art. 417 del Código de Proced. Penal se ha dirigido al Jefe de Policía recabando los informes pertinentes; ese funcionario, como es del dominio público, ha solicitado informe previo del Sr. Asesor de Gobierno, quien se ha expedido en la forma y extensión que la prensa ha hecho pública, opinando que el Sr. Jefe de Policía se ha ajustado a las órdenes del gobierno debiendo así informarlo a V. S., como también, que las personas citadas se hallan en virtud del estado de sitio, a la disposición del gobierno.

Siempre de acuerdo a la información suministrada por la prensa local, la Jefatura de Policía haciendo suyo el citado dictamen, ha evacuado en esos términos el pedido de informe librado por V. S., razones que en definitiva han sido aceptadas como viables por el Juzgado, por lo que no se ha hecho lugar a los recursos interpuestos.

Sin embargo, y salvando desde ya los altos respetos que V. S. me merece como magistrado y profundo conocedor de las leyes del país, entiendo que en esa resolución como en el dictamen aludido, no han sido interpretadas las cláusulas constitucionales de la Nación en la medida que era menester, atento la gravedad y la importancia del problema institucional que esos recursos han planteado. Sostengo que se ha abordado el caso de una forma general, sin haberse suministrado a V. S. los debidos fundamentos para resolver el recurso, en la forma particular que los hechos deben relacionarse con las cláusulas constitucionales pertinentes.

Tratándose de un asunto en que es inútil negar el carácter político que lo ha producido, en un asunto que con gran facilidad la pasión política puede desplazar a los argumentos de la sana razón, créome en la absoluta necesidad previa de asegurar a V. S. por mi fe de hombre honesto, que al interponer el presente recurso apoyado en los nuevos fundamentos que he de traer a colación, me he despojado de toda intención y de toda pasión, que



no fuera pura y exclusivamente la del universitario que acicateado por la noble inquietud espiritual de profundizar la ley, busca en su letra y en su esencia, la solución de los problemas que diariamente se presentan en la vida de las instituciones.

Y ese único afán, llevado a un caso práctico en que la libertad de seres humanos es el único norte que se persigue, con prescindencia de los móviles que las personas afectadas hubieran podido tener, ese afán digo, es tanto mayor cuanto como en el presente caso, se ha de estudiar un problema institucional argentino que lejos de haber sido agotado a pesar de la aplicación reiterada del sistema, fáltale todavía la total doctrina y jurisprudencia de todos sus aspectos.

Insisto Sr. Juez en que V. S. tenga presente en todo momento esta exposición de motivos, porque no deseo, no quiero, que la suspicacia pública que no siempre sabe apreciar con la ecuanimidad que solo disponen los Jueces, vea en este alegato, la ciencia del derecho puesta al servicio de las pasiones humanas.

### III

He dicho anteriormente que se ha abordado el asunto de una manera general; agrego además, que se ha tomado y se ha aplicado el art. 23 de la Constitución Nacional sin tener en cuenta que si ese artículo es por sí solo aparentemente suficiente para los fines perseguidos, en realidad y según sean los hechos y según las personas o las cosas caigan en situaciones especiales, es necesario cohesionar ese art. 23 con otras disposiciones constitucionales que son, todas reunidas, las fuentes de interpretación del derecho público argentino.

No es novedad alguna, no solo en el Derecho Constitucional sino en cualquier otra rama del Derecho Público o Privado, que sus respectivas prescripciones están colacionadas con otras disposiciones que aclaran, modificando, el espíritu y el alcance que pudieran surgir de una disposición tomada aisladamente. Y eso es precisamente, lo que me propongo realizar en este memorial, para fundar el presente recurso.

### IV

Es innegable que por la ley del Congreso de la Nación y de acuerdo a las disposiciones del art. 23 de la Const. Nacional, han quedado suspendidas las garantías cons-



titucionales en todo el territorio de la República.

Ahora bien, esa suspensión no implica en modo alguno, la suspensión de toda la Constitución Nacional y por consiguiente de todos sus principios básicos. Como lo he recordado y es demasiado bien sabido, por el artículo 23 **SOLO QUEDAN EN SUSPENSO LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES**, otorgándosele al mismo tiempo al Presidente de la Nación, un conjunto de facultades que entran en el ejercicio de ese principio institucional de excepción.

Esa facultad de suspender las garantías constitucionales será todo lo peligrosa que se quiera, pero es indudable que no consiste, cuando así ha sido resuelto, una arbitrariedad o extralimitación del Gobierno Federal. Sentado ese principio que nace de la ley, cada cual podrá tener su opinión acerca de su mayor o menor peligrosidad. En lo que a mí respecta y dicho sea de paso, podré sí, tener mi opinión particular sobre la conveniencia de esa disposición extraordinaria como sistema apropiado para el mantenimiento y salud de la organización política de una democracia. Pero esa opinión propia carente de la autoridad que es patrimonio de los grandes estadistas, aún así, no tendría cabida dentro de este recurso en que no se discute el principio en sí mismo, sino en su aplicación.

Ello no obstante y sin que ni aun entre líneas pueda considerarse una crítica a los constituyentes de 1853, pues no ignoro que ellos estatúan para la República del 53 cimentada sobre las cenizas todavía calientes de la anarquía y desgobierno, para una República en que los más, solo tenían un conocimiento empírico de las libertades ciudadanas, no obstante decía, y como un descargo de conciencia de quien no vive en el 53 y sí en 1933, permita V. S. que transcriba las palabras de un convencional de la Provincia de Bs. Aires, el eminente maestro de Derecho Constitucional, Dr. José M. Estrada, pronunciadas en 1873: "El estado de sitio, que no es otra cosa que la suspensión de las garantías constitucionales, no importa otra cosa que las facultades extraordinarias conferidas a los Poderes que ejercen la autoridad..."

"Pero principalmente para los tiempos de peligro es que se necesitan las garantías. ¿Qué me importa a mí que una Constitución declare que yo tengo derecho a defenderme plenamente ante los Tribunales, mientras no tenga nada que defender? ¿Qué me importa tener leyes, Constitución y garantías para tiempos pacíficos



“y normales, si estas garantías se han de suspender cuando los casos de más peligro, es decir, en los tiempos críticos? Esto me recuerda a aquel cuento un poco grotesco, pero gráfico, que me permite recordar, de aquel barbero que tenía un paraguas roto, que interrogado por un conocido porque usaba un paraguas tan roto como el que llevaba, le contestó: “este lo tengo para los días que llueve”. Estas garantías suspendidas en días críticos, como el paraguas del barbero, son para los días que llueve”.

Salvado ese escrúpulo con mejores palabras e ingenio que el mío propio, prosigo Sr. Juez. No desconozco esa facultad del Gobierno Federal en virtud de una ley o un decreto declarativo de estado de sitio. En cambio sí, sostengo, que todo cuanto no pueda encerrarse dentro de la clásica enumeración de garantías individuales, o lo que es lo mismo, todo lo que constituye el armazón constitucional de la Nación, subsiste a pesar del estado de sitio.

Y que, entonces, aún dentro de ese estado excepcional, los magistrados de cualquier jerarquía deben velar para que la supremacía de la Constitución esté por encima de cualquier disposición oficial o individual, que pretenda apartarse de la ley suprema, llegando si es necesario, a corregir los desaciertos bien o mal inspirados que vayan más allá de lo que lícitamente les está permitido.

## V

Nadie osaría en la República Argentina sostener doctrinariamente, que el estado de sitio suspende el ejercicio total de la Constitución. Sin embargo prácticamente, como en el caso que motiva este recurso, es posible llegar al desconocimiento de aquel principio básico e intangible, importando así, atentar contra la propia organización nacional, invadiendo facultades privativas del gobierno central y destruyendo en potencia al régimen federal de la República, donde cada uno de los gobiernos nacional o provincial se desenvuelve dentro de sus respectivas facultades y atribuciones.

Que los constituyentes del 53 al sancionar el art. 23, quisieron solamente suspender las garantías constitucionales, lo prueba la circunstancia tantas veces recordada por nuestros tratadistas, de haberse aquellos apartado precisamente en ese punto de las ideas de Alberdi, cuando delineando bases para nuestra Constitución, establecía en el art. 28 de su proyecto, que declarado el estado



de sitio quedaba **EN SUSPENSO EL IMPERIO DE LA CONSTITUCION.**

Y por si no fuera suficiente ese antecedente, cabe recordar, que igualmente en ese sentido y por reiteradas veces se ha pronunciado la S. Corte de Justicia de la Nación, toda vez que directa o incidentalmente se ha avocado a su conocimiento.

En fin, por lógica es fuerza que sea así, si precisamente el fundamento principal que genera al estado de sitio es, dentro del espíritu y la letra del propio art. 23, el de la suprema razón de asegurar el ejercicio de la Constitución, esto es, su misma existencia puesta en peligro por la conmoción interior o el ataque exterior.

Como dice el Dr. Joaquín V. González en la pág. 269 de su conocido Manual: "El artículo 23 no dice que se suspende el "imperio de la Constitución", como otras, sino que sólo se refiere a los derechos, prerrogativas y facultades que la Constitución reconoce y concede principalmente a los individuos".

## VI

Pido a V. S. se sirva excusar esta aparente digresión que podrá parecerle extemporánea, pero que he creído conveniente llevar a cabo, para demostrar a la luz de los preceptos constitucionales y algunos de sus antecedentes doctrinarios, el primer fundamento que me he propuesto establecer para el mejor resultado de este recurso, cual es, que no obstante el estado de sitio y excepto las garantías constitucionales que corresponden al capítulo de derechos y garantías, **SUBSISTE LA ARQUITECTURA CONSTITUCIONAL EN TODOS SUS DEMAS EFECTOS.**

Logrado ese propósito, surge pues como una resultante, que en el momento actual de la República y a pesar del estado de sitio, coexisten un gobierno federal y catorce gobiernos de provincia.

Y pregunto ahora ¿el estado de sitio, el art. 23 de la Constitución Nacional, tienen influencia sobre la existencia y la personalidad política de esos catorce gobiernos? Y más particularmente: ¿el estado de sitio extiende o reduce, según los casos, las facultades propias de cada gobierno de provincia?; o si V. S. lo prefiere ¿el estado de sitio hace que los gobiernos provinciales sufran una capitis diminutio en sus facultades privativas y fundamentales reconocidas y establecidas expresa o tácitamente



por la Constitución Nacional; o por el contrario, ese estado anormal, amplía y extiende por sí la esfera propia de sus atribuciones concediéndoles otras que no le son propias en la existencia normal de la República?

Si hubiera de contestarse con la realidad institucional federal argentina, no habría ninguna duda al respecto: el estado de sitio no quita ni pone nada al régimen político de las provincias argentinas, las que conservan íntegramente todo el poder no delegado al Gobierno Federal y sin que en ningún momento, ni aún por vía de procedimiento extraordinario, adquieran los poderes expresamente delegados al gobierno de la Nación.

Pero si en cambio hubiera de responderse a las preguntas formuladas teniendo en cuenta los hechos producidos en esta capital o sean las detenciones efectuadas y mantenidas no obstante la falta de mérito para continuar algunos ciudadanos privados de su libertad, en ese caso digo, la respuesta fuera difícil y siempre contraria al espíritu y a la letra constitucional, puesto que, anticipándose a conclusiones a que habré de arribar, los poderes públicos de la Provincia de Buenos Aires habrían aumentado sus propias y legítimas facultades.

En efecto: producidas las circunstancias que se conocen, la policía de la Provincia procedió en indagación de lo que mejor fuera conveniente, a la detención de varios vecinos de esta ciudad. Instruido el sumario de práctica, calificado prima facie de tentativa de sedición e intimidación pública, delito o tentativa sujeta a procedimientos y jurisdicción judicial propia, la instrucción entiende con las constancias de autos a la vista, que no corresponde decretar la detención preventiva de casi todos aquellos por no existir méritos hasta ese momento; pero que y siempre procediendo de oficio, motu proprio, atento al estado de sitio vigente, esas personas deben pasar a disposición del gobierno, resolviéndose en consecuencia y con distinta motivación, trabar la libertad de esos ciudadanos.

Y es aquí Sr. Juez, donde debo retroceder en busca del primer fundamento asentado ut-supra. Las personas nombradas quedan por una orden local, a disposición del gobierno. ¿A la orden de qué gobierno? Siendo como son autoridades policiales de la provincia, lógico es por razones elementales de dependencia, queden sometidos a disposición del gobierno de la provincia. De no ser así y en la hipótesis que su detención hubiere SIDO SOLICITADA EXPRESAMENTE por el gobierno de la Nación, lo que sin embargo no es admisible por cuanto todo lo actuado ha sido EXPONTANEAMENTE de acuerdo a normas procesales o si se quiere, policiales de la provincia, en



virtud de sus propias facultades de prevención, aún así, esos detenidos debieran haberse remitido a la C. Federal ingresando en establecimientos sometidos a la orden y jurisdicción del Presidente de la República.

En modo entonces, que son las autoridades policiales de la Provincia ratificadas por el poder local después de haber oído a su Asesor legal, las que por su cuenta, DE OFICIO, ordenan y mantienen la detención de las personas, ejercitando así una facultad que de ninguna manera disponen, ni en propiedad ni por tácita delegación, obrando por su propia inspiración en pugna con las disposiciones constitucionales que prohíben a las autoridades de provincia ejercitar los poderes delegados al Gobierno Federal.

Dentro del mecanismo institucional argentino y de acuerdo a los preceptos del art. 23, es solamente el Presidente de la Nación por sí o por los funcionarios que directamente le están subordinados, quien puede ordenar y mantener la detención de los habitantes de la República durante el estado de sitio y sin que medie causa legal para ello. "Su poder — dice la parte final del artículo refiriéndose exclusivamente al Presidente — se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas, o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino".

El hecho de que rijan en la Provincia de Buenos Aires el estado de sitio no significa, no puede significar nunca, que sus funcionarios locales se conviertan automáticamente en funcionarios o autoridades nacionales dependientes del Presidente de la Nación, o en el mejor de los casos, de autoridades que se subroguen al mismo. El estado de sitio en una provincia sólo tiene el alcance de quedar allí suspendidas las garantías individuales. Se me podrá objetar que al suspenderse esas garantías, desaparece transitoriamente todo el sistema protector de la libertad y propiedad de sus habitantes. Realmente es así pero ello no implica otra cosa, a manera de ejemplo, que desaparece la garantía de la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, la libertad de tránsito, de reunión, de prensa, etc., que puede ser resuelta por las autoridades locales, ya que no siendo la del arresto, la Constitución no ha establecido ninguna norma para el caso. En suma, que por omisión voluntaria o involuntaria de la Constitución, las autoridades provinciales pueden allanar todas las garantías, MENOS UNA, LA DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL, reservada expresamente al Presidente de la Nación.

No habiendo cesado el imperio de la Constitución, el



estado de sitio no transforma ni la naturaleza de los poderes públicos ni las atribuciones propias de los mismos. Ni el Presidente de la Nación puede ejercer los poderes naturales de un gobernador de provincia, ni éste o estos a su vez, pueden arrogarse los que son propios del Presidente, máxime cuando son de excepción.

Donde la ley distingue, no podemos crear analogías, sobre todo en materia de libertades públicas. Ya lo dijo en su tiempo el General B. Mitre: "La Constitución es de derecho estricto; no puede ampliarse ni restringirse en su letra; donde dice expresamente una cosa, no puede suponerse otra ni dejarse de tomar en cuenta".

Y si por vía de pretendida razón de suprema necesidad pública, peligrosísima razón, se torturara a la Constitución, torciendo su letra, borrando sus principios y trastornando todos sus principios de estructura federal, fuera entonces del caso repetir con el Dr. Guillermo Rawson: "que cuando para salvar a un país regido por instituciones libres requiere el sacrificio frecuente de los principios cardinales que aseguran los derechos humanos, no vale la pena de salvarlos". (Escritos y discursos; pág. 263, T. II).

Interpretado el principio de manera distinta, interpretado con una extensión de facultades que sólo se facultan al Presidente de la Nación, equivaldría en fin, dotar a las provincias del derecho de decretar a su vez el estado de sitio, como alguna vez se ha pretendido.

## VII

No debe sentirse alarmado V. S. porque destaque esta posibilidad puesto que en verdad y prácticamente en el presente caso, las autoridades provinciales han actuado como si el estado de sitio fuera del resorte local. Si como ya se ha visto, sólo el Presidente de la Nación en virtud del estado de sitio puede ordenar el arresto de los individuos sin causa legal justificada, todo gobierno de provincia que en su jurisdicción local obra de la misma manera, está ejerciendo facultades también excepcionales que solamente le son conferidas a quien tiene potestad para decretar la suspensión de las garantías. Constitucionalmente hablando no se concibe la facultad de arrestar sin causa, sin la facultad generadora para decretar el estado de sitio.

Yo no niego ni pretendo negar que las autoridades de provincia puedan ejercitar todos sus propios poderes para la prevención, el descubrimiento y hasta el castigo de



todo hecho o acción que la ley hubiere declarado punible; muy por el contrario, habría de censurársele si la autoridad omitiere toda cuanta medida fuese conducente a esos fines, tanto más cuanto que con el estado de sitio se le allanan dificultades de orden procesal. Pero también digo, que puesto en marcha el procedimiento policial o procesal con o sin garantías individuales, si se evidencia que una o más personas nada tienen que hacer con el hecho incriminado, ese o esos individuos no pueden ni deben quedar privados de su libertad a *la orden del gobierno*, que no es medida de orden normal ni extraordinario.

Y llegando hasta interpretar no sólo la letra o el espíritu sino también la intención que se tuvo al estatuir el estado de sitio como medida excepcional, si a juicio de las autoridades provinciales tales personas carentes de motivos legales para continuar detenidos, pudieran sin embargo ser sospechosas para la tranquilidad y estabilidad pública, esa autoridad no habría de quedar desarmada, pues bien puede haciendo uso de las medidas policiales, estrechar la vigilancia adecuada. Pero aún más y siempre dentro de los únicos resortes del gobierno provincial, si a su juicio y con todos los peligros que significan prejuzgar a veces por primeras impresiones, aún así, si creyera que esos individuos pueden comprometer el orden público, la estabilidad de las autoridades y el ejercicio de la Constitución, todavía tendrían como último e importante recurso, el de llevarlo a conocimiento del Presidente de la República a fin de que éste ejercitara la facultad que le concede el art. 23.

El hecho de que en la Capital Federal y por circunstancias análogas se hubiere llegado a mantener la detención de personas a las que judicialmente se había ordenado su libertad, es bien distinto. Las subsiguientes detenciones han sido realizadas por órdenes directas del Presidente de la Nación y por intermedio de funcionarios policiales que dependen exclusivamente del Presidente, actuando en un punto del territorio argentino que es federal por su propia naturaleza y que de acuerdo al inc. 3 del art. 86 de la Constitución Nacional, está bajo la inmediata autoridad del Presidente.

## VIII

Había dicho en las consideraciones generales, que para fijar el alcance del estado de sitio y muy especialmente en cuanto se refiere al arresto de los habitantes de una provincia, que el espíritu constitucional debe buscarse



no sólo en la letra del art. 23 de la Constitución Nacional sino también en otras disposiciones de la misma Carta. En efecto, es de rigor tomar en cuenta a los arts. 53, 67 (inc. 26), 86 (inc. 19), 104 y 108, todos los cuales unidos al art. 23 ya citado, coordinan la doctrina institucional argentina sobre la prerrogativa exclusiva del Gobierno Federal en la declaración y aplicación del estado de sitio.

Esta insistencia de mi parte en ese aspecto que conceptúo fundamental para la dilucidación de éste recurso, tiene su razón de ser. Al finalizar el capítulo VI de esta ya demasiado extensa exposición, decía, que mantener el arresto sin causa legal de las personas por sugestión propia del gobierno provincial, equivalía dotar a las provincias por torcidas vías, el derecho de decretar el estado de sitio y ejercitar las facultades propias de ese estado extraordinario.

Pero antes de abordar este nuevo aspecto del problema, solicito nuevamente de V. S. quiera tener presente, que trato de llegar a fundar el segundo argumento de fondo de este recurso, por lo que desde ya y una vez más, pido a V. S. todas las excusas del caso por el giro que vá tomando este escrito.

He dicho, dotar a las provincias por torcidas vías, por-que en rigor, hasta el momento presente las provincias carecen de esa prerrogativa institucional y en cuanto a la Provincia de Buenos Aires, es evidente por las razones que he de expresar, ha renunciado por ahora a incorporar ese principio en su Constitución local.

Parecería prima facie al anticipar estas consideraciones que cometo una herejía o me debato dentro de la más absoluta ignorancia. Pero a poco que se ahonde el asunto, V. S. convendrá conmigo que no es tan extemporánea la reflexión sabiendo V. S., como sabe, que si antes se discutió ardorosamente el asunto en pro y en contra, todavía en la actualidad no se ha dicho la última palabra autorizada para dirimir la cuestión. De la redacción combinada de los artículos 104 y 108 de la Constitución Nacional se han tomado y se toman aún elementos diversos de juicio, para admitir o desechar esa facultad de las provincias.

Pero no siendo del caso reeditar en esta ocasión todos los argumentos en favor o en contra, ya que afortunadamente dispongo de otros elementos para el fin perseguido, como no siendo tampoco absolutamente necesario aventurarme en consideraciones acerca de si habrían razones de orden institucional o también de orden práctico para munir a las provincias de ese derecho, por esos motivos omito fatigar la atención de V. S. con la exposición y



análisis de los argumentos aducidos en diversidad de polémicas orales o escritas.

La célebre controversia entre aquellos dos colosos del pensamiento argentino, Don Domingo F. Sarmiento y el Dr. Guillermo Rawson, es suficientemente conocida para que merezcan ser repetidos los argumentos y antecedentes propios y extraños que entonces esgrimieran ambos contendientes. Sólo sí he de decir, que el caso no fué sometido a la prueba definitiva de constitucionalidad ante la única autoridad capacitada constitucionalmente para pronunciarse y resolver la cuestión de una vez por siempre.

El hecho real es que, antes o después de la polémica, las provincias no han insistido sobre el punto y que algunas como la de Mendoza, San Luis y Corrientes que en distintas épocas habían incorporado ese principio a sus constituciones, lo suprimieron definitivamente.

En cuanto a la Provincia de Buenos Aires y sin remontarme a lejanos antecedentes, baste recordar que en su Constitución de 1854, como Estado separado de la Confederación, había establecido en su artículo 110 esa facultad, como privativa del Gobernador con cargo de rendir cuenta a la Asamblea general y supeditada por el artículo 111, a las declaraciones o limitaciones que oportunamente pudiera establecer la Constitución general de la Nación.

Más posteriormente cuando se reunió la Convención Reformadora del período 1870-1873, el asunto fué llevado nuevamente al tapete de la discusión debido a un proyecto presentado en ese sentido por la sub-comisión encargada del capítulo sobre el Poder Legislativo. Conviene decir que en el mismo seno de la comisión hubieron serias disidencias, pues varios de sus miembros se opusieron al artículo proyectado que se presentó con la siguiente redacción: "Artículo 20 it.: Declara en estado de sitio uno o varios puntos del territorio de la Provincia y por un tiempo limitado cuando la seguridad pública lo exija, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Nacional".

Al tratarse el punto que demandó tres fogosas sesiones consecutivas, se originó un intenso debate en el que participaron especialmente, las grandes figuras del país: José M. Estrada, Luis Sáenz Peña, Emilio Alvear, Rufino Elizalde, Bernardo de Irigoyen, Miguel Navarro Viola, Vicente G. Quesada, Luis V. Varela y muchos más. El proyecto fué rechazado por gran mayoría: 28 votos contra 6; de toda esa discusión sólo me permito transcribir parte de la opinión del Dr. Quesada, por ser precisamente uno de los que creían en principio "que las provincias tienen perfecto derecho para declarar el estado de sitio". Aquel gran convencional, pese a sus convicciones se opuso a la



adopción del sistema: “¿Conviene que las Provincias tengan esa facultad? Francamente, señor Presidente, yo me inclino a creer que conviene que no la tengan, porque ya es bastante el peligro de que puedan ser suspendidas las garantías constitucionales por el Gobierno General, para que agrandemos todavía mucho más este peligro dándole esa facultad a cada una de las provincias”.

Finalmente, la última Convención Reformadora del año 1889 que dictó la Constitución vigente de la Provincia, tampoco estableció el principio.

He creído necesario remontarme a todos esos antecedentes para demostrar, si cabe, que la Constitución actual de la Provincia de Buenos Aires no ha incorporado expresamente el estado de sitio como facultad local. Eso por un lado; veamos ahora por el lado de la Constitución Nacional, a los efectos de establecer, SI IMPLICITAMENTE PODRIA HACERLO.

## IX

Dije antes que para resolver esta cuestión debía estudiarse no sólo el art. 23, sino que también, los arts. 53, 67 (inciso 26), 86 (inciso 19), 104 y 108 de la Constitución de la Nación.

El art. 23 es en su primer parte, declarativo. Por el 53, 67 y 86, no cabe duda alguna que es facultad del gobierno federal la que, según sean las circunstancias, puede ser del resorte del P. Ejecutivo o del P. Legislativo. Lo que tampoco ofrece dudas, es que en cualquier caso, siempre y únicamente el Presidente de la Nación es el único magistrado de la República que puede ordenar el arresto de las personas sin causa legal comprobada, bajo la vigencia del estado de sitio.

Dícese, sin embargo, que esa facultad y el ejercicio de la misma podría ser concurrente con los gobiernos de provincia, y se invoca para ello, la segunda parte del art. 108 de la Constitución Nacional, en cuanto a las prohibiciones allí enumeradas no figura la de decretar el estado de sitio.

Tampoco en este caso quiero reproducir y comentar argumentos valiosos de insignes tratadistas argentinos, incluso los de la hora presente. Pero es imprescindible para el objeto que este recurso persigue, insista aunque sea suscitadamente, en que si entre las facultades negadas a los gobiernos de provincias no se incluye la del estado de sitio, es no sólo porque aquella enumeración no es taxativa, sino que además era innecesario que se incluyera ex-



presamente, por cuanto la prohibición surge de todo el contexto de la Constitución.

Y que, si tan sólo por no figurar el estado de sitio en la enumeración de las prohibiciones consignadas por el art. 108, hubiera de entenderse que tienen ese derecho, con el mismo criterio también, podría negársele en atención a que el art. 107 no lo incluye entre los derechos allí mencionados.

La clave para la interpretación la proporciona el estudio combinado del artículo 104 con el primer apartado del 108 cuando respectiva e imperativamente dicen así: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal”, y, “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación”.

Resta saber ahora, si el estado de sitio ha sido delegado expresamente al Gobierno Federal. Entiendo, que sin necesidad de profundizar el análisis, el espíritu más legalista no podría dudar con la sola lectura de los citados artículos 23, 53, 67 y 86, que ese poder ha sido bien expresamente delegado al Gobierno Federal y que por consiguiente, la primer parte del artículo 108 es de estricta aplicación.

Y llego así, Sr. Juez, al segundo fundamento de mi exposición: NI EXPRESA NI IMPLICITAMENTE, ni por la Constitución Nacional y ni siquiera por la provincial, las autoridades de la Provincia de Buenos Aires pueden ejercer la facultad de mantener detenidas a las personas, sin causa legal para ello, bajo el imperio del estado de sitio. Esa facultad, ese derecho excepcional, es privativo, propio, insustituible, del Presidente de la Nación que al no haberlo ejercitado hasta el momento, no puede serle opuesto a las personas por quien interpongo este recurso.

## X

Réstame un tercer fundamento, que he de tratarlo si V. S. me permite la expresión, como argumento negativo, pues habré de considerarlo por vía de hipótesis. Me refiero a la posibilidad de que V. S. me oponga el art. 110 de la Constitución Nacional: “Los Gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”.

La disposición del art. 110 es para los tiempos en que la Constitución rige íntegramente en todos sus alcances y se ejercita siempre de poder a poder por intermedio de los funcionarios encargados de hacerlo.



Mucho menos puede invocarse para el estado de sitio por múltiples razones de orden constitucional.

En primer término, que si los gobernadores de provincia son agentes naturales para hacer cumplir la Constitución, entonces todo estaría dicho recordando que la Constitución ordena, como lo he demostrado, que sólo el Presidente puede ordenar la detención de las personas. Curioso en verdad sería, que los gobernadores como agentes naturales para hacer cumplir la Constitución, se prestaran a violar sus disposiciones.

Además, también, que cuando se dice hacer cumplir las leyes, la prescripción constitucional se remite a aquellas que siendo de carácter general para toda la República, caen para su cumplimiento bajo las disposiciones de procedimiento procesal o administrativo preestablecidos, con sus normas fijas y sus funcionarios propios.

Y si particularmente se quisiera entender para el mejor cumplimiento de la ley de estado de sitio, como ésta no puede ni ha podido conferirle la facultad de detención de las personas que ni aún el Congreso puede ceder, el gobierno provincial no podría, hasta forzando el concepto de "agente natural", tomar esas medidas.

Por otra parte, el concepto "agente natural" no debe confundirse con el de funcionario subordinado al gobierno central. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mientras el sistema federal de gobierno subsista en la República Argentina, es el primer mandatario de su provincia que en el territorio de la misma no recibe órdenes de ninguna naturaleza. No es ni siquiera algo así como un "interventor federal", para prolongar a través de su mando y su persona, la personalidad política del Presidente de la Nación.

Y si dentro del juego regular de las instituciones que no desaparecen por el estado de sitio, el Presidente no puede ordenar medida alguna al Gobernador de la Provincia, y si tampoco éste puede, por sus propias facultades allanar la libertad individual, ¿de dónde surge la facultad que en éste caso se ha ejercitado? Formulada la pregunta, surge por si sola la arbitrariedad que se comete.

Volviendo sobre el concepto de "agentes naturales", no puede dársele la acepción de dependencia obligada, porque por ese camino llegaríamos a la destrucción paso a paso del régimen federativo argentino que de continuar en la forma que se practica, avance sobre avance, quedará solamente en la letra de la Constitución como cosa muerta. Para confirmarme en esta idea me alienta la elevada opinión vertida a ese respecto por el inolvidable Dr. Joaquín V. González: "Y de la otra parte, el peligro era tanto o



más grande aún, porque si el gobierno de la Nación llegaba por cohecho, presión o error, a convertir a los gobernadores de provincia en sus "agentes", en el sentido ordinario y natural de la palabra, todo el sistema de autogobierno provincial quedaría destruido, porque habrían muchos actos en que la responsabilidad de estos funcionarios ante sus electores y ante sus jueces constitucionales, dejaría de existir". (J. V. González; Manual, pág. 793).

Pero, sin sutilizar la cuestión y circunscribiéndome al punto que me interesa, si hubiera de interpretarse que so pretexto de que cada Gobernador de provincia como agente natural del Gobierno de la Nación pudiera tener la facultad de detener a las personas bajo el estado de sitio, llegaríamos a la absurda situación por no decir monstruosa, de que en la República Argentina, existen en un momento de su vida pública, QUINCE autoridades supremas en sus respectivas jurisdicciones que tienen en sus manos la libertad individual de sus conciudadanos, sin contar los diez gobernadores de territorios nacionales.

Pero como a su vez cada uno de esos quince mandatarios debe forzosamente diluir su autoridad en una escala infinita de comisarios, sub-comisarios, auxiliares, oficiales de toda jerarquía, sargentos y hasta cabos honorarios de policía, vendría a resultar que los constituyentes de 1853, que tuvieron especial cuidado de que sólo el Presidente de la Nación pudiera privar de su libertad a los habitantes del país, habrían, mediante la inclusión del art. 110, destruido su principal preocupación y el único freno del estado de sitio.

Expresado lo que antecede, que no es una mera probabilidad sino que de admitirse el procedimiento seguido en esta capital se habría convertido en una realidad, conengo que sin EL CONCURSO de los gobernadores de provincia le sería difícil al Presidente, aunque no imposible, obtener todos los resultados que se han buscado con esa medida extraordinaria.

Pero el concurso, y aquí tenemos una explicación racional y sobre todo constitucional de las palabras "agente natural", quiere decir, que ordenada la detención de determinados habitantes de la provincia por el Presidente de la Nación, éste LA SOLICITA al Gobernador quien a su vez, como agente natural del Gobierno Federal, recién entonces imparte las órdenes del caso.

O también, que conociendo el Gobernador de la Provincia, que un grupo de habitantes, puede constituir un peligro para la conservación del orden público, lo hace saber confidencial u oficialmente al Presidente de la



Nación para que éste si lo cree conveniente ejercite su prerrogativa en la forma anteriormente descripta. Y así, sin necesidad de violentar el texto constitucional, que debe ser caro para todo argentino, puede darse perfecto cumplimiento a la ley de estado de sitio cuando rige mediante sanción del Congreso, lo mismo que cuando es por decreto del Presidente de la Nación.

Pero como se vé, una cosa es el concurso y otra la potestad de un gobernador de provincia. Y por más que se diga y se exprima al Código supremo, mientras no se modifique el régimen federal de gobierno o no se dicte la ley reglamentaria del estado de sitio, ni el Presidente de la Nación puede ceder o delegar facultades que por ser propias de su cargo no son cesibles ni delegables, ni los Gobernadores de provincia pueden arrogarse derechos que constitucionalmente no están a sus alcances.

## XI

En resumen, Señor Juez: Que no estando en suspenso el ejercicio total de la Constitución Nacional y subsistiendo por ende el sistema federal de gobierno en toda su amplitud y efectos; que por otra parte siendo facultad privativa, personal e incesible del Presidente de la Nación la de ordenar la detención de los habitantes del país bajo el estado de sitio; que además, no disponiendo expresa o tácitamente el Gobierno de la Provincia del derecho de decretar el estado de sitio en su jurisdicción por lo que no puede subrogarse al Presidente de la Nación en sus facultades privativas; y no siendo tampoco el Gobierno de la Provincia un subordinado del Presidente, no ha podido de oficio ordenar la detención sin causa de las personas ya antes nombradas, ni ponerlas a disposición de ningún gobierno, erigiendo así un nuevo sistema privativo de libertad que no existe en la Provincia de Buenos Aires.

Por todas esas razones y las expresadas en capítulos anteriores, atento a lo que disponen las leyes fundamentales de la Nación y de la Provincia aplicables al caso, es que solicito de V. S. quiera resolver este recurso de habeas corpus.

Y para terminar permita V. S. una última reflexión expuesta con toda sinceridad: frente al enorme poder de los gobiernos sólo disponen los hombres de la protección de la Justicia.

Los ciudadanos detenidos sin causa legal por una autoridad que no es la del artículo 23 de la Constitución Na-

cional, saben que están a merced de V. S., saben que la simbólica balanza de la Justicia está custodiada por un dignísimo magistrado que ni ha de aflojar la venda de Themis ni ha de inclinar el peso de su sitial para que el fiel deje de oscilar libremente y se incline al peso de la ley suprema.

Saben en fin, que el austero magistrado en quien depositan todas sus esperanzas, es inaccesible en el desempeño de su augusta misión, a la fragilidad y a las sollicitaciones de la pasión humana. Y saben también que han de encontrar en V. S. al verdadero dispensador de la Justicia que sin dar nunca de más, tampoco mide con mezquina vara.

Quiera V. S. conceder el recurso interpuesto en todos sus alcances.

Es justicia.

*Luis R. Longhi.*



La Plata, Enero 17 de 1933.

La Pata, Enero 18 de 1933.

Visto el recurso de habeas-corpus que interpone el doctor Luis R. Longhi en favor de los doctores Luis C. Caggiano, Rodolfo Games y José Valido Marti y de los señores Ricardo F. Berri, Juan Abella y Edgardo P. Iturría,



### Y CONSIDERANDO:

1º — Que por expediente Nº 35.033 de la Secretaría actuaria y con fecha 17 del corriente fué resuelto, desestimándolo, un recurso análogo interpuesto por el doctor Juan E. Lozano en favor de los cuatro nombrados en primer término.

2º — Que habiéndose juzgado en esa ocasión los mismos hechos que motivan el precedente escrito, con respecto a las mismas personas, y no importando la petición que se provee la interposición de ningún recurso legal contra aquél pronunciamiento, sino una nueva acción de habeas-corpus, independiente de la anterior pero idéntica en sus fines y causas concretas, debe estarse a lo ya resuelto en cuanto a los aludidos señores Caggiano, Games, Valido Marti y Berri. La improcedencia de la duplicación del recurso ha sido expresamente decidida por nuestros Tribunales (Suprema Corte de Justicia de la Provincia; Fallos; Serie V, tomo X, página 511).

3º — Que en lo que concierne a los dos nombrados en último término, señores Abella e Iturría, resulta del parte preventivo elevado al infrascripto por el señor Comisario Instructor don José Macchi, en el sumario que instruye con intervención del Juzgado, que esas personas se encuentran detenidas, al igual que las anteriores, a disposición del Poder Ejecutivo y que tal restricción de su libertad fué dispuesta en virtud de la ley de estado de sitio que rige en todo el territorio de la Nación.

4º — Que el letrado peticionante, tras una minuciosa exégesis de los textos constitucionales pertinentes, sustenta la tesis de que la detención de sus patrocinados es ilegal por emanar de las autoridades provinciales y nó



de las federales, sosteniendo el principio de que solamente el Presidente de la Nación puede ejercitar durante el estado de sitio la facultad de arrestar y trasladar a las personas dentro del territorio del país, sin sujetarse a las normas legales ordinarias. Alega que el P. E. de la Provincia carece de facultades para proceder por sí mismo a las detenciones en cuestión, sin orden o solicitud especial del Presidente de la República, que en el subjuicio no se ha invocado.

5º — Que planteado en tales términos el caso jurídico sometido a la decisión del infrascripto, resulta, sin duda, arduo y complejo. La ausencia de toda ley reglamentaria de la disposición contenida en el art. 23 de la Constitución Nacional, el texto simple y breve de la ley que autorizó al Poder Ejecutivo de la Nación para declarar el actual estado de sitio, el silencio de los antecedentes parlamentarios respectivos, la falta de reglamentación de esa misma ley y del decreto correlativo, la inexistencia de toda norma jurisprudencial al respecto y aun de toda opinión doctrinaria concreta sobre el punto planteado, restan al proveyente todo elemento autorizado de juicio, obligándolo a decidir sin tan eficaces auxilios un caso nuevo y único (en cuanto sepa) en la jurisprudencia nacional dentro del término angustioso de horas que le marca la ley del habeas-corpus.

6º — Que en tales condiciones, resulta preciso comenzar por establecer que ni el texto constitucional ni disposición legal alguna ha negado expresamente a las autoridades provinciales la facultad que les desconoce el recurrente. El artículo 23 de la Constitución Nacional atribuye, es cierto, esa facultad al presidente de la Nación, pero ello no significa desconocer que concurrentemente la posean los poderes ejecutivos de provincia; y el propio peticionante reconoce que estos últimos se encuentran facultados durante la vigencia del estado de sitio para allanar por sí mismos, de propia autoridad, todas las demás libertades individuales y sus garantías, exceptuando únicamente la seguridad personal.

Ahora bien, ¿es una facultad concurrente de los gobiernos nacional y provinciales la de arresto y traslación de las personas en el caso del artículo 23 de la carta fundamental? ¿O es, como se pretende, una facultad exclusiva, privativa del ejecutivo nacional?

La cuestión se liga estrechamente a aquella otra, tan calurosamente debatida por nuestros jurisconsultos y parlamentarios, relativa a si las provincias conservan concurrentemente con el Estado Nacional la facultad de decre-



tar el estado de sitio en su propio territorio, cuestión ésta que apasiona a la doctrina pero que tampoco ha sido llevado nunca a los estrados de la justicia ni obtenido solución en ellos.

Los argumentos esgrimidos a este respecto por quienes sostienen la tesis de la concurrencia son, por cierto poderosos y eficaces, contando además en su favor con la autoridad de algunos de nuestros más insignes estadistas y constitucionalistas de nota, como Sarmiento, Elizalde, Sáenz Peña, Quesada, Alcorta, etc. Esa tesis coincide también con la doctrina predominante en los Estados Unidos de América, doctrina a la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha asignado en general el alto valor de normas orientadoras en la interpretación de nuestro derecho constitucional.

Cualquiera sea la solución definitiva que se adopte respecto de esa cuestión, que no corresponde decidir aquí, por ser agena al caso en debate, aunque estrechamente vinculada a él, es lo cierto que ni aún los más encarnizados sostenedores de la tesis centralista, han negado a los Gobiernos locales la facultad de *aplicar en su territorio las disposiciones del estado de sitio*, es decir, la facultad de arrestar a los individuos con prescindencia de las normas ordinarias. En cambio, existen autores que han afirmado explícitamente esa facultad, haciendo precisamente de ello un argumento para sostener que es innecesario atribuir a las provincias la facultad de declarar el estado de sitio, porque conviene sea el Poder Ejecutivo de la Nación quién concorra a salvar sus dificultades, “siendo las autoridades provinciales, las que llevan a cabo su aplicación” (véase Alcorta: Las garantías constitucionales, pág. 233).

7° — Que esta forma ecléctica de resolver el problema, centralizando en el poder federal la facultad de *declarar* el estado de sitio y subdividiendo su *aplicación* entre aquél y los gobiernos locales, constituye de paso, indirectamente, una solución doctrinaria a la cuestión que se plantea en este recurso. El juzgado la comparte decididamente por entender que es la que mejor consulta los principios del régimen federal que nos rige y las necesidades de la defensa social en ocasión de graves eventos. En efecto, tal interpretación evita por igual el riesgo de desfigurar, unitarizándola, nuestra organización federativa esencial y el peligro aún mayor de ofrecer a la anarquía un campo propicio de desarrollo, por falta de normas claras que organicen y rijan el estado de sitio en el país.

Esa solución permite, cuando el país se halle enfrentado



a las gravísimas y extraordinarias situaciones que con el estado de sitio se procuran prevenir o reprimir, la acción armónica de los Poderes seccionales y del gobierno federal para que concurren con idéntica eficacia y oportunidad al logro de tales fundamentales objetivos; y coincide con el propósito exteriorizado en el artículo 108 de la Constitución, de extender a los gobiernos de provincia la facultad de contribuir con el concurso de su fuerza propia a la estabilidad de la Constitución y de las instituciones nacionales. Esa disposición consagra, en efecto, la facultad de las provincias para adoptar por sí mismas medidas tan extremas cuales las de “armar buques de guerra o levantar ejércitos”, en los casos de “invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación”, es decir, en casos similares a los que dan motivo a la declaración de estado de sitio.

Tal interpretación, evita a la vez, la justificable desigualdad que significaría considerar a las autoridades ejecutivas de los territorios nacionales y de la capital federal, cualquiera sea su jerarquía, capacitadas para colaborar durante el estado de sitio en la acción del Poder Ejecutivo Nacional, por razón de su dependencia directa de éste, y negar a los Poderes Ejecutivos Provinciales una potestad similar, no obstante su calidad constitucional de “agentes naturales del gobierno federal, para hacer cumplir la constitución y las leyes de la Nación”, que le asigna o reconoce el art. 110 de la carta fundamental.

8º — Que, por otra parte, la aplicación de las Leyes Nacionales en el territorio de las Provincias compete normalmente a las autoridades de ésta, por imperio de la cláusula constitucional precitada, por lo menos cuando la Nación no ha constituido allí organismos propios al efecto. Difiere a este respecto nuestra organización de su similar norte-americana, donde en cada uno de los Estados, existe un “marshal” o agente federal encargado de esa misión. Entre nosotros, el Gobernador de Provincia es el empleado nacional ejecutivo, su agente natural *sui jure*, “que éso quiere decir natural, propio” (Sarmiento: Práctica Constitucional, Tomo I, pág. 26).

Si esta es la norma común que nos rige, si los Gobernadores de Provincia son los encargados de la aplicación de las Leyes Nacionales en el Territorio de su mando, las disposiciones federales relativas al estado de sitio, no podrían hacer una excepción a ese principio, por lo menos mientras no exista una decisión expresa en contrario de la legislación correspondiente.



9º — Que la letra del art. 23 de la Constitución Nacional, invocado por el recurrente, no puede tener el alcance que se pretende por el mismo; y en cuanto a los arts. 53, 67 (inc. 26) y 86 (inc. 19), que también se citan en el recurso, sólo aluden a la competencia para la “declaración” del estado de sitio, más no para su “aplicación”, que es de lo que aquí se trata.

La lectura libre y desapasionada del texto del art. 23, advierte que el propósito de los constituyentes no fué más allá que señalar concretamente la extensión de facultades del Presidente de la República, durante el estado de sitio, estableciendo límites precisos a su poder, para evitar que tales facultades pudieran confundirse jamás con las “extraordinarias” o con la “suma de poder público”, de que trata el art. 29 de la misma Constitución. Esa aparece como la única finalidad que se ha perseguido al adoptarse el texto constitucional que nos ocupa: impedir que la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, fuerte de por sí y robustecida extraordinariamente con relación a los derechos individuales durante el estado de sitio, llegase a considerarse autorizada para aplicar sanciones definitivas e irreparables sobre las personas o las cosas. La alusión al Presidente de la República únicamente, omitiendo referencia a otra autoridad, no puede interpretarse — como lo quiere el recurrente — como un propósito de *centralizar exclusivamente en la persona del Presidente de la Nación* la facultad y la responsabilidad de las medidas propias del estado de sitio, exigiendo en cada caso la orden directa y personal del primer magistrado de la República. Semejante interpretación literalista resultaría incompatible con los problemas de la realidad, especialmente en un territorio tan dilatado como el de nuestro país y tratándose de medidas que ordinariamente deben aplicarse sin dilación, frente a riesgos públicos graves e inminentes.

10. — Que los antecedentes históricos de la cláusula constitucional a que nos referimos contribuyen también a esclarecer su verdadero sentido, acorde con la interpretación que aquí se sustenta.

Trátase, en efecto, de una disposición proyectada por Alberdi (art. 28 de su proyecto de Constitución), quién la tomó directamente de la Constitución Chilena por la que sentía una poderosa atracción. El origen unitario de la disposición adoptada ha dejado sus huellas en nuestro texto nacional, al aludir únicamente al Presidente de la Nación, pero tal defecto, — que no es imputable a Alberdi, pues el texto de su proyecto se refería en forma genérica



a "La autoridad", sin precisar su naturaleza, ni su carácter federal o local — no puede autorizar las restrictivas conclusiones que se pretenden por el letrado recurrente, pues para ello sería menester perder de vista los rasgos típicos de nuestra organización Constitucional, diversos a este respecto del modelo Chileno. La adopción no ha podido hacerse sin la necesaria adaptación, pese a los defectos de redacción que se señalan; y toca a la jurisprudencia corregir por vía de la interpretación, una deficiencia que no podría invocarse con criterio estricto sin desconocer principios básicos de nuestra organización, haciendo que la Constitución se destruyera a sí misma.

11. — Que una antigua decisión de la Corte Suprema Federal, presta también un apoyo indirecto a la tesis que aquí se sustenta, robusteciéndola con la autoridad del más alto Tribunal de Justicia de la Nación.

En el fallo de 14 de octubre de 1875, que se registra en el tomo XVI (2ª serie, tomo VII), pág. 431-433, se estableció que "en estado de sitio, los ciudadanos y extranjeros pueden ser removidos discrecionalmente, sin que por ello se deban daños y perjuicios, *por la autoridad Nacional o Provincial*". Tratábase en ese caso de la prisión y traslado de un extranjero realizada por orden del Gobierno de San Luis, contra cuya provincia se intentó demanda sobre daños y perjuicios; y si bien la Corte, aceptando el dictamen de su Procurador General, doctor Carlos Tejedor, no entró expresamente al fondo de la cuestión que se promueve en el subjuicio, el texto de su resolución implica reconocer a las autoridades Provinciales las facultades que se cuestionan, tanto como declarar su irresponsabilidad en ese caso.

12. — Que, por último, la responsabilidad propia de todos los funcionarios públicos, nacionales y provinciales, característica de nuestro régimen institucional, unida a las limitaciones generales del art. 23, al contralor del Parlamento (asegurado por el art. 67, inc. 26) y a los recursos de amparo que los particulares pueden oportunamente intentar ante la Justicia, constituyen garantías suficientes para prevenir posibles abusos de poder, de parte de cuantos intervengan en la aplicación de las medidas relativas al estado de sitio, — sin que la centralización que se pretende importe una garantía más eficaz.

A este respecto, vale la pena destacar que en el recurso interpuesto no se cuestiona en modo alguno la razón o la justicia íntima de la medida cuya revocación se gestiona, ni se dicen traspasados los límites que por su naturaleza



misma tiene marcada la medida que la motiva. La argumentación es de orden meramente formal, concretándose a discutir si el funcionario autor de la restricción fué o no el competente para disponerla. Y aunque es obligación de la justicia velar por el respeto de todas las disposiciones legales, así sean ellas solamente de forma, es indudable que la motivación sustancial de los recursos de amparo es lo que debe pesar con mayor fuerza en la conciencia de los magistrados, máxime cuando se trata de medidas que por sí mismas importan el ejercicio de una facultad discrecional.

13. — Que aparte de las razones anteriores, que conducen a declarar la improcedencia del recurso, media una última consideración jurídica que concurre al mismo fin.

Cualquiera sea la autoridad a quien compete ejercitar estas medidas y cualquier sea, en este caso, la que haya ordenado las detenciones, es indudable (así resulta del informe producido por la policía, cuya exactitud no niega ni discute el recurrente) que se trata de restricciones adoptadas “en virtud del estado de sitio que rige en el territorio de la Nación”. Se trata, por consiguiente, de detenciones dispuestas por una autoridad (competente o incompetente) en aplicación de la ley y decreto nacionales que ha declarado en estado de sitio a todo el territorio de la República. Siendo así, el juzgado carece de facultades para conocer en este recurso de amparo, porque el artículo 20 de la ley nacional número 48, atribuye a la justicia federal la competencia para investigar sobre el origen de la prisión y resolver en consecuencia, cuando se trate de individuos “detenidos o presos por una autoridad nacional o a disposición de una autoridad nacional o so color de una orden emitida por autoridad nacional”.

Esa prescripción legal exterioriza un principio básico dentro del régimen federal, según el cual las magistraturas locales sólo son competentes para pronunciarse sobre la legalidad de una prisión ordenada bajo la autoridad de las leyes particulares de ese Estado; pero tratándose de prisiones impuestas, en virtud de leyes federales o so color de órdenes o decretos emanados del Poder Ejecutivo de la Nación (en este caso el decreto que declaró en estado de sitio el territorio del país), son los jueces de la Nación los únicos facultados para conocer en los recursos de amparo correspondientes (Story, traducción Calvo, tomo I, pág. 188, N.º. 675).

Por estos fundamentos, no se hace lugar al recurso deducido, con costas (art. 428 del Cód. de Proced. Penal).

*Pedro J. Alegre*  
Ante mí, *Rogelio Nosenzo*.

CEDULA DE NOTIFICACION  
CAMARA TERCERA DE APELACIONES EN LO  
CRIMINAL Y CORRECCIONAL  
LA PLATA



Doctor Luis Ricardo Longhi.

Hágole saber que en el recurso de habeas corpus interpuesto en favor del Dr. Luis C. Caggiano y otros, la Excelentísima Cámara Tercera de Apelaciones dictó la resolución siguiente: "La Plata, Febrero 8 de 1933. No siendo ninguno de los casos previstos en las leyes nacionales Nros. 48 y 4055 ni procediendo recurso alguno contra la resolución de fs. 24v, dictada por la Excma. Cámara de Apelación del Departamento Judicial del Centro, art. 426 del Cód. de P. Penal, no ha lugar al recurso deducido para ante la Excma. Corte Suprema de la Nación. Lecot - Ves Losada. Arau - Ante mi: A. A. Echagüe".

Queda usted notificado.

La Plata, Febrero 8 de 1933.

Firmado: Juan A. López.



El letrado que suscribe, Luis Ricardo Longhi, constituyendo domicilio legal en la Diag. Sáenz Peña N° 628, 5° Piso, Escr. K, a V. E. digo:

Que vengo a deducir recurso de queja contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, por la que se deniega el recurso extraordinario de apelación interpuesto para ante V. E.

Por expediente N° 35092 iniciado ante el Sr. Juez del Crimen de La Plata, Dr. Pedro J. Alegre, se ha cuestionado expresamente la autoridad ejercida por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, como repugnante a la Constitución Nacional, arts. 23, 104 y 108. La decisión recaída en 1ª y 2ª Instancia ha sido en favor de la validez de la autoridad provincial, por lo que el caso está comprendido en las disposiciones del art. 14, inc. 2 de la ley federal N° 48.

Así mismo, en el citado juicio, se ha cuestionado la inteligencia de varias cláusulas de la Constitución Nacional, arts. 23, 53, 67 (inc. 26), 86 (inc. 19), 104 y 108, habiendo recaído sentencia en contra de esas disposiciones constitucionales que han sido también materia del juicio (art. 14, inc. 3 de la ley N° 48). Tanto en uno como en el otro caso, la resolución definitiva proviene de un tribunal superior de Provincia, que cierra en la misma el procedimiento del juicio entablado (art. 462, in-fine del Código de Proced. Penal de la Provincia).

Habiéndose deducido en tiempo y forma el recurso extraordinario de apelación para ante V. E., el Tribunal Superior, en el caso la Excma. Cámara de Apelaciones, lo ha denegado por considerar que el juicio no comprendía ninguna de los casos previstos en las leyes nacionales Nos. 48 y 4055.

Salvando el respeto que me merecen siempre las decisiones judiciales, entiendo que por el contrario, las cuestiones planteadas, están comprendidas expresamente en esas leyes, por lo que, el recurso extraordinario ha sido mal denegado.

Por ello pues, solicito de V. E., se digne solicitar de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal de La Plata, la remisión del expediente N° 35092, y con los autos a la vista, quiera V. E. conceder el recurso extraordinario denegado.

Provea V. E. como lo pido, que

ES JUSTICIA.

Otro sí digo: Que constituyendo los autos principales un recurso de habeas corpus, y atento a la naturaleza y fines del mismo, solicito la habilitación de horas para la resolución de este recurso de queja.

Será también justicia.

*Luis R. Longhi.*

Febrero 9 de 1933.





El letrado que suscribe, Luis Ricardo Longhi, en el recurso extraordinario de apelación deducido contra la sentencia denegatoria del habeas corpus interpuesto a favor de los Dres. Luis C. Caggiano, Rodolfo Games y José Valido Martí y los señores Ricardo F. Berri, Edgardo P. Iturria y Juan Abella; constituyendo domicilio legal en la Diag. Sáenz Peña N° 628, 5° Piso, escritorio K, a V. E. digo:

I

Que por expediente N° 35092 del Juzgado de Crimen de La Plata a cargo del Sr. Juez Dr. Pedro J. Alegre, interpuso el recurso de amparo que corre a fjs. 1 de estos autos, sosteniendo que: a pesar del estado de sitio que rige actualmente en la Provincia de Buenos Aires como en toda la Nación, no estando en suspenso el total ejercicio de la Constitución Nacional, subsiste entonces, todo el sistema federal de gobierno característico de nuestras instituciones políticas en toda su amplitud y efectos, sin que se hubieran reducido o ampliado las facultades propias de los gobiernos de la nación o provincias.

Que por otra parte, siendo facultad privativa, personal e incesible del Presidente de la República, la de ordenar el arresto de los habitantes del país bajo el estado de sitio; que no disponiendo expresa o tácitamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires del derecho de decretar el estado de sitio en su jurisdicción, no puede subrogarse al Presidente de la Nación en sus facultades privativas que le nacen de la Constitución;

Y, que no siendo tampoco el Gobernador de la Provincia un subordinado del Presidente, no ha podido de oficio ordenar la detención sin causa de aquellas personas ni ponerlas a disposición de ningún gobierno, erigiendo así, además, un nuevo sistema restrictivo de libertad que no existe en ley alguna.

El Señor Juez del recurso, en una meritoria sentencia tanto más digna de ser mencionada cuanto debe tenerse presente que como Juez de feria, se ha visto abocado a una tarea abrumadora, no hizo lugar al citado recurso. Apelada la resolución, fué confirmada en Segunda Instancia "por sus fundamentos".



Esas circunstancias, que vulneran — muy respetuosamente lo digo — los principios básicos de nuestra Constitución, principios invocados expresamente antes de ahora, han hecho que llegue ante los elevados estrados de V. E. en virtud del recurso extraordinario deducido. Por lo que, y de acuerdo a la disposición del artículo 8 de la ley federal N° 4055, vengo en tiempo y forma a elevar ante la ilustrada consideración de V. E. la memoria autorizada por la ley.

## II

Excma. Suprema Corte: Al traer ante el más Alto Tribunal de la República, la cuestión debatida en estos autos, lo hago convencido íntimamente, que he de encontrar en el supremo intérprete de nuestra Constitución, la reafirmación más absoluta de los sólidos principios que presiden y dirigen la organización política argentina.

Y sí, como dijera el inmortal Montesquieu, “en la vida de los pueblos más libres de la tierra, hay casos en que es necesario poner por un momento un velo sobre la libertad, como se cubre la efigie de los dioses”, también llego ante vuestreza, convencido, que el supremo Tribunal sabrá para su mayor gloria y por la intangibilidad de los principios institucionales que otrora se amasaron dolorosamente, sabrá digo, rasgar los velos que se interpusieran para cubrir las libertades argentinas, que serán lo que deben ser, dioses a cara descubierta.

Adelantándome a mis propios fundamentos para rebatir los que han sido articulados en la sentencia recurrida, sostengo que la Constitución Nacional se basta a sí misma para todos los casos y en cualquier tiempo; todo consiste, no sólo en saber interpretarla en los casos de dificultad, sino en querer hacerlo con devoción democrática. Nunca como en esta ocasión me han parecido más admirables, las sabias consideraciones de uno de vuestros más ilustres antecesores, el Dr. A. Bermejo, cuando decía:

“Nada autoriza a los poderes públicos, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial, a apartarse de la Constitución, pues en todas las circunstancias y en todos los tiempos la autoridad de ésta subsiste y aún en los casos extraordinarios que motivan el estado de sitio, ella misma ha delimitado las facultades que confiere al gobierno, (art. 23). Su terminología es bastante general para adaptarse a las modalidades de los tiempos y a los adelantos de la civilización, siempre en armonía con el espíritu de sus disposiciones, pues el gobierno nacional es de poderes enumerados que deben ser ejercidos con las limitaciones



que ella establece. No hay circunstancia que autorice una desviación porque su significado no se altera.

“El gobierno de la Nación argentina está regido por una constitución escrita que ha reconocido los derechos individuales preexistentes a ella como inherentes a la personalidad humana; ha organizado los diversos poderes y deslindado sus atribuciones, fijando límites a su ejercicio y los medios para que esos límites no sean ultrapasados. Buena o mala no tenemos más que acatarla inclinándose ante la soberanía popular expresada en ella en la forma más solemne e imperativa, pues como decía uno de los miembros informantes en la sesión del 20 de Abril de 1853, “La Constitución es el pueblo, es la Nación Argentina hecha ley”. (Voto del Dr. Bermejo: Jurisp. Argentina, tomo VIII, pág. 269).

Y bien Excma. Suprema Corte: glosando al austero magistrado digo, sin que en mi espíritu se aniden mezquinas convicciones y sin que mis palabras se dirijan a gobierno o funcionario alguno, que el secreto sólo consiste, en saber inclinarse siempre ante la soberanía popular hecha ley.

### III

Es poco menos que imposible llegar a establecer dentro de nuestra organización federal con quince poderes judiciales distintos, si en la práctica constitucional subsiguiente a 1853, ha sido planteado judicialmente el mismo caso que aquí se debate. Pienso, sin embargo, que mucha razón tiene el erudito magistrado de Primera Instancia cuando manifiesta el desconocimiento de caso similar, que de existir, no ha sido divulgado ni conocido suficientemente.

Pero si no existe o no se conoce ningún caso judicial definitivo donde se hubiere cuestionado lo que aquí se discute, nuestras remembranzas políticas conservan en cambio, el precedente extra-judicial llevado por vía de queja ante el Presidente Sarmiento.

Refiere el Editor de las Obras Completas de Sarmiento, que entre los papeles dejados por éste, se encontró una petición de los vecinos de Santa Fé, señores Mariano López y Cayetano Baudin, quienes en el año 1873, hacían saber a Sarmiento, reclamando reparación, que habían sido detenidos y desterrados de su provincia por orden del Gobernador Iriondo en virtud del estado de sitio. Consideraban que ese procedimiento era arbitrario e ilegal, pues tal estado excepcional sólo confiere al Presidente de



la Nación la facultad de remover los individuos, facultad que no era delegable.

Según la nota del citado editor, inserta en la pág. 111 del tomo XXXI, fué hallada también la contestación autógrafa de Sarmiento, de fecha 31 de Mayo de 1873. En su respuesta, Sarmiento calificaba la tesis de aquellos ciudadanos como "doctrina inventada por Vds."; les advertía que debía serles indiferente conocer (?) quien los remueve puesto que no tienen derecho a conocer la causa. Que debían estar agradecidos (!) porque se les había señalado la provincia de Buenos Aires como punto final de destierro donde la vida era más agradable y finalmente, que en ausencia de principios más claros, el juicio del Jefe de Estado, *hace regla*. Así, con su acritud característica, sin mayores explicaciones de orden institucional, Sarmiento resolvió el caso. Los peticionantes continuaron en su destierro y el asunto no llegó a ventilarse judicialmente.

Confieso a V. E. que cuando llevé la cuestión a 1ª Instancia desconocía ese antecedente, pero aseguro también al Tribunal que ahora que lo conozco y no obstante el formidable escollo de "la doctrina inventada" que sin saberlo he resucitado, me ratifico en mis convicciones que me vienen de muy lejos.

La figura genial de Sarmiento será así, un serio obstáculo pero también un poderoso incentivo para acometer mi empresa, ya que, cualquiera fuere el resultado, me habré honrado con exceso, sólo al pretender rectificar a aquel coloso. Lo malo es, que será la reedición de la lucha entre el gigante y el enano.

#### IV

Ruego a V. E. se digne tener por reproducidos todos los argumentos que he fundamentado en mi escrito de fjs. 1; los que siguen a continuación provienen del examen que me permito hacer de la sentencia recurrida. Pero, previamente, dos aclaraciones.

En el considerando sexto de aquella sentencia se dice: "que el propio peticionante reconoce que estos últimos (los gobiernos de provincia) se encuentran facultados durante la vigencia del estado de sitio para allanar por sí mismos, *de propia autoridad*, todas las demás libertades individuales y sus garantías, exceptuando únicamente la seguridad personal".

So pena de destruir la unidad de doctrina sostenida en mi escrito de fjs. 1, no es posible aseverar que yo hubiera



podido sostener, que los gobiernos de provincia podían de *propia autoridad* allanar las garantías constitucionales. Me he limitado a decir allí, que decretado el estado de sitio por el gobierno federal, *única autoridad* capacitada para ello, los gobernadores podían allanar algunas garantías que no habían sido expresamente reservadas al ejercicio del Presidente de la Nación.

A su vez, por el primer párrafo del considerando noveno, parecería que el recurrente al considerar los arts. 23, 53, 67 (inc. 26) y 86 (inc. 19) de la Constitución Nacional, hubiera cuestionado únicamente, la declaración del estado de sitio. Pero, como se advierte fácilmente en el cap. IX de aquella exposición, la cita de esos artículos se hacía con el propósito de demostrar, que la facultad de decretar el estado de sitio, es un derecho reservado expresamente al gobierno federal, por lo que era y es de estricta aplicación en el caso, el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Nacional.

## V

### LA CONCURRENCIA DE PODERES

La sentencia apelada esboza en el considerando sexto, la concurrencia de facultades entre los gobiernos nacional y de provincia para declarar el estado de sitio.

Bueno es decir, sin embargo, que el fallo hace la salvedad que esa cuestión y cualquiera sea la solución definitiva, no puede ser materia de discusión en el recurso. Pero a renglón seguido se acepta que guarda estrecha vinculación con el caso debatido, lo que, unido al pensamiento de descentralización que anima la sentencia, evidencian que para el juzgador ha pesado mucho en esta materia, la concurrencia de facultades. De ahí pues, la necesidad de adicionar nuevos argumentos a los ya expresados en aquella oportunidad.

Como muy bien lo sostiene la sentencia, tampoco este punto ha sido llevado a decisión judicial. El caso más importante que se conoce en la historia constitucional argentina, es el que se planteó en 1863, entre Sarmiento como gobernador de San Juan y Rawson como ministro del Interior; pero como es bien sabido, se resolvió de ejecutivo a ejecutivo a través de una ardorosa polémica oficial. Luego pues, se carece hasta el presente de una interpretación judicial al respecto.

Pero si es de lamentar que el intérprete constitucional no se haya podido pronunciar hasta ahora, no por eso se



carece de otra valiosa fuente de interpretación: me refiero a la legislativa. En efecto, es sabido que de acuerdo al art. 5 de la Constitución Nacional de 1853, las provincias debían someter sus respectivas constituciones a la revisión y aprobación del Congreso Federal.

Y bien; para no citar sino un caso: la Constitución de la provincia de Corrientes facultaba a su Legislatura local para declarar en estado de sitio una parte o la totalidad de su territorio. Al tratarse en el Congreso de la Nación esa Constitución se resolvió que la provincia carecía de ese derecho, tal como lo aconsejaba el informe de la comisión parlamentaria concebido así: "El inciso 29 del art. 25 de la Constitución de Corrientes dice así: "Declarar en estado de sitio la provincia o parte de su territorio a petición del poder ejecutivo, por un término que no exceda de 20 días, y en las limitaciones del art. 23 de la Constitución Nacional. V. H. debe *negar absolutamente* su aprobación al referido inciso, *porque la medida prevista en él es de la exclusiva competencia del gobierno federal con arreglo a los arts. 64 inc. 26 y 86 inc. 19 y 20 de la C. N.*".

Lo mismo se resolvió con las constituciones de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Por la constitución de La Rioja del 25 de Marzo de 1855 se establecía en el art. 19 inciso 20:

"Declarar en estado de sitio uno o más puntos de la provincia por un término limitado, en los casos de conmoción interior o ataque exterior".

Y por el art. 70, que: "En caso de conmoción interior o ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esa suspensión no podrá el Gobernador de la Provincia condenar por sí ni aplicar penas. Su deber se limitará en tal caso a trasladarlos de un punto a otro de la Provincia si ellos no prefiriesen salir fuera del territorio".

Y bien, por la ley federal N° 37 del 27 de Agosto de 1855, sancionada por el Congreso de Paraná se desaprobaron expresamente esas disposiciones.

Igualmente la Constitución de San Luis del 18 de Abril de 1855, establecía en el art. 19 inc. 22 que:

"Declarar en estado de sitio la Provincia o parte de su territorio, y suspender la Constitución local por un término limitado que no pase de tres meses, en los casos de conmoción interior o ataque exterior".



Y por el art. 75 se estatuyó: “En caso de conmoción interior o ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio donde existe la perturbación del orden, quedando allí suspendidas las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Gobernador de la Provincia condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Provincia si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio”. Era casi el mismo art. 70 de la Constitución de La Rioja, con el agregado de “arrestarlas” que aquella no tenía.

También esta Constitución como las anteriores fué presentada al Congreso de Paraná para su revisión y aprobación previa de acuerdo a la ley federal N° 9 dictada el 29 de Noviembre de 1854 como una consecuencia del entonces artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853.

Esas disposiciones de la Constitución de San Luis fueron desaprobadas por la ley nacional N° 39, dictada por el Congreso de Paraná con fecha del 29 de Agosto de 1855.

Posteriormente, en la Convención Nacional de 1860 se reprodujo la misma discusión con el resultado ya conocido; y finalmente, en el período 1870-1875, la Convención Reformadora de la Provincia de Buenos Aires dijo la última palabra en el mismo sentido.

Esa interpretación legislativa, a falta de una judicial, es más que suficiente entonces para oponerla con éxito a la doctrina de la concurrencia de facultades que expresamente se admite en la sentencia recurrida.

## VI

### b). — *La jurisprudencia norteamericana:*

En el fallo citado, se hace mérito de la jurisprudencia norteamericana aplicable al caso. Entiendo por mi parte, que esa jurisprudencia no puede ser estrictamente aplicada en el caso cuestionado.

En primer término, la fuente de origen del estado de sitio argentino que no tiene el mismo alcance en los Estados Unidos, debe buscarse en la Constitución de Chile de donde fué tomado por Alberdi. En segundo lugar, que el estado de sitio de nuestra Constitución, no puede ser asimilado a la suspensión del auto de habeas corpus que autoriza la Constitución Federal de los Estados Unidos (inc. 2 de la sección IX, Art. Primero).



Y surge aquí, nuevamente la gran figura de Sarmiento. Para él, el estado de sitio del art. 23 “es lo mismo que la suspensión del escrito (auto) de habeas corpus, y como esta denominación y fórmula judicial no es familiar en nuestra lengua, se ha tomado de otras constituciones la palabra estado de sitio, por similitud de poderes, aunque restringidos los originarios a la simple aprehensión y remoción de los individuos en casos de conmoción interior e invasión” (Obras Completas, pág. 117; T. 21).

A pesar de la salvedad final de Sarmiento, creo que éste llegó a confundir las dos instituciones. El estado de sitio del art. 23, sin ser exactamente igual, se acerca al estado de sitio francés, que según un autor de aquel país puede definirse así: “Una medida de seguridad pública que temporalmente suspende el imperio de las leyes ordinarias en una o más ciudades, en una provincia o en un país entero, y los considera entonces sujeto a las leyes de guerra” (Bouillet, pág. 622). Esa definición traduce el pensamiento de la ley del estado de sitio, dictada el 10 de Julio de 1791 por la Asamblea Constituyente de Francia. La constitución chilena se inspiró en ella.

En cambio, la suspensión del auto de habeas corpus a que se refiere la cláusula norteamericana citada, es de alcance distinto y más restrictivo: “En este caso sólo se halla comprendida una garantía personal, como es la de no ser arrestado sino en virtud de una orden escrita de autoridad competente, y ser informado de la causa de la prisión. Por más extensión que se dé a este privilegio, basta decir que su suspensión, es la suspensión de toda la Magna Carta, no pasa de los límites más extensos de la libertad personal; en todo caso es más limitado que el estado de sitio y se halla comprendido en él, como una de las garantías constitucionales que su declaración deja en suspenso” (J. V. González. Manual: pág. 256).

La suspensión del auto de habeas corpus sólo tiene efecto sobre la libertad individual sin llegar nunca al allanamiento de las demás garantías civiles y políticas consagradas por la Constitución de los Estados Unidos.

Eso en cuanto a sus alcances y efectos; en lo que a su declaración se refiere, el texto argentino es más amplio también, ya que el estado de sitio puede ser declarado por el Congreso (art. 67, inc. 26), por el Presidente con acuerdo del Senado (art. 53), y por el Presidente en receso del Congreso (art. 86).

En cambio, en los Estados Unidos, es facultad privativa del Congreso Federal. El Presidente norteamericano sólo puede poner en ejercicio la suspensión del auto de habeas corpus, cuando ha sido autorizado expresamente por ley



federal, con la particularidad de que “todos los demás recursos contra los arrestos ilegales quedan en pié, y pueden emplearse contra las partes que los hacen o que los continuaran” (T. Cooley; Derecho Constitucional, pág. 281).

En modo tal, que si alguna jurisprudencia hubiera de aplicarse por extensión de argumentos, no habría de ser en este caso, la de los Tribunales norteamericanos. Y en cuanto a la chilena, sería improcedente, dado el régimen unitario de gobierno establecido en aquella nación.

## VII

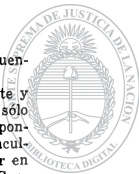
### c). — *Facultad de levantar ejércitos.*

En el considerando séptimo de la sentencia, se invoca la facultad constitucional acordada a las provincias de “armar buques de guerra o levantar ejércitos” en los casos “de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación” (art. 106), y agrega el fallo: “es decir, en casos similares a los que dan motivo a la declaración del estado de sitio”.

Efectivamente, son casos similares, pero esa franquicia constitucional equivale dotar a las provincias de los medios idóneos para defender su integridad territorial o política, sin recurrir al estado de sitio. Por lo mismo que no se les acuerda el derecho de semejante declaración, es que en los casos extremos se les faculta con otras medidas igualmente conducentes para prevenirse de los peligros de invasión o conmoción interior. (De acuerdo: doctrina del Dr. González Calderón; Der. Constitucional, tomo II, pág. 266).

Pero es más; esa facultad que se invoca en la sentencia, fué precisamente la que sirvió como poderoso argumento a los Convencionales de la Provincia de Buenos Aires de 1870, para oponerse con toda energía, al derecho de las provincias para declarar el estado de sitio.

Me remito a lo expresado a ese respecto en mi escrito de fojas 1; agrego además lo que sobre ese punto adujera el convencional Dr. Quesada: “Por lo demás, como he dicho antes, yo creo que las provincias tienen perfecto derecho para declarar el estado de sitio; pero considero un peligro innecesario, porque con arreglo al art. 108 de la Constitución Nacional, las provincias tienen derecho a levantar ejércitos en casos de peligros que den lugar a ello, y desde que pueden levantar ejércitos, es evidente que tienen derecho de hacerlo en épocas en que pueda



sobrevenir un conflicto, que estén sometidos a la influencia militar.

“Con esto creo que las provincias tienen lo suficiente y que no tienen necesidad de tener una facultad que sólo debe dejarse al Poder Nacional, puesto que para responder a un peligro inminente basta con que tengan la facultad de formar un ejército. Por esta razón he de votar en contra del artículo que se discute”. (Debates de la Convención Constituyente, página 913; Publicación Oficial). Ningún convencional replicó al Dr. Quesada; y como se sabe y se ha dicho en el escrito de fjs. 1, por éste y otros argumentos, el proyecto fué rechazado por 28 votos contra 6.

## VIII

### d). — *Los antecedentes históricos.*

El fallo citado, considera “que los antecedentes históricos de la cláusula constitucional a que nos referimos contribuye también a esclarecer su verdadero sentido, acorde con la *interpretación que aquí se sustenta*”.

Salvando una vez más los respetos que me merece el magistrado, opino sin embargo, que los antecedentes que allí se invocan, constituyen la mejor fuente de interpretación para llegar a la tesis que vengo sosteniendo, esto es, que no existen tales facultades concurrentes para declarar el estado de sitio.

En verdad, como se dice en la sentencia, el art. 23 de la Constitución Nacional tiene como antecedente al art. 28 del proyecto de Alberdi quien en esa parte se inspiró decididamente en la constitución chilena. Campea en todas las páginas de Alberdi la mayor admiración por el sistema que convirtió al P. Ejecutivo de Chile en un poder fuerte, vigoroso, capaz de hacer frente a toda anarquía interior; uno de los medios adecuados a ese fin era el estado de sitio que rayaba en el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la Nación. Todo ese sistema lo señala en sus obras, como un ejemplo y una necesidad para la República Argentina.

Pero la Constitución de Chile de entonces como la actual, establecía el sistema unitario de gobierno, en el que la aplicación del estado de sitio no originaba dificultades constitucionales de orden práctico. El estado de sitio concebido para un país unitario, era posible y lógico en una organización política donde se quería robustecer el gobierno central, sin gobernadores autónomos, como también lo fué en su país de origen, la república francesa.



Pero trasplantada como una cosa exótica a nuestro país, trasplantado de un medio unitario a otro federal, debía resentirse fatalmente por la diversidad de formas de gobierno. Las provincias argentinas no eran las simples divisiones administrativas de la constitución chilena; eran sí, catorce gobiernos autónomos tan soberanos en su jurisdicción territorial como el mismo gobierno federal, sin más limitaciones que las de los artículos 5 y 108 de la Constitución Nacional.

Alberdi propuso un sistema propio de una unidad de régimen incompatible con una federación. Para Alberdi no había ni podía haber concurrencia de facultades en esa cuestión, es más, las negaba por adelantado: "La guerra puede ser interior y tener principio en conmoción o rebelión contra las autoridades constituídas, en cuyo caso incumbe esencialmente la declaración de estado de sitio, *al poder supremo de la Confederación* encargada de su defensa y seguridad". (Alberdi: Elementos del Der. P. Provincial; 1ª parte, Cap. 8, párrafo III).

Empeñado Alberdi en la creación de un Poder Ejecutivo fuerte, no podía admitir pues, que los poderes de propia conservación se repartieran entre tantos gobiernos provinciales, lo que a su juicio y es una verdad histórica, debía achacarse la desorganización nacional.

Me permito señalar a V. E. que estas reflexiones no constituyen una simple opinión mía, y sobre todo, hipotética. De ninguna manera; para Alberdi mismo, el gobierno central no podía en el ejercicio de sus poderes expresamente reservados, permanecer a merced de la complacencia o de la buena voluntad de los gobiernos provinciales. Sus anhelos de ver a un P. E. nacional fuerte y vigoroso, no concebían la caridad política provincial:

"De otro modo su poder no será general sino en el nombre. Siendo uno y nacional el país en los objetos constituidos de dominio del gobierno federal o común, para la acción de este gobierno nacional deben ser, *como no existentes los gobiernos provinciales*. El debe tener facultad de *obrar sobre todos los habitantes de las provincias, no al favor de los gobiernos locales, sino DIRECTA E INMEDIATAMENTE, como sobre los ciudadanos de un mismo país y sujetos a un mismo gobierno general*". (Bases; capítulo XIV).

Si como tantas veces se ha dicho y el mismo Alberdi lo confesaba, atrayéndose las iras de Sarmiento, nuestro país no podía por sus antecedentes separarse de una federación unitaria o de una unidad federativa, es evidente entonces, que en el estado de sitio por él preconizado, la unidad de régimen excluía todo asomo de federalismo.



De acuerdo a la unidad federativa de su doctrina, Alberdi "unitarizó" el estado de sitio y los constituyentes del 53, "representantes del pueblo de la nación", aceptando la doctrina expuesta en las Bases, delegaron expresamente esa facultad al Gobierno Federal, convirtiendo así al Presidente de la Nación, en circunstancias extraordinarias, no en el presidente norteamericano, sino en el presidente de una unidad de gobierno.

La unidad federativa de Alberdi no constituía una fórmula especial en que combinándose los dos sistemas surgía, como en las reacciones químicas, un nuevo cuerpo o nuevo sistema con desaparición de sus elementos constitutivos. Nó; la unidad federativa de Alberdi implicaba decir, que en algunos casos, frente a elementos propios del sistema federal, se admitían otros característicos del régimen unitario. Y es, en el estado de sitio, donde mejor se demuestra el federalismo unitarizado de Alberdi; el estado de sitio, fué en fin, la fórmula de transacción parcial de unitarios y federales.

La adopción no puede entonces, como se pretende en la sentencia, adaptarse a nuestro federalismo. Lo que es propio de un sistema, difícilmente por no decir imposible, se puede adaptar a otro que es antagónico. Y entre cumplirlo o nó, preferible es que se le adopte sin adaptarlo, ya que, como trataré de demostrarlo más adelante, se puede aplicar el estado de sitio por su propia letra y espíritu sin destruir el régimen federal, y sin que por ello tampoco, la Constitución se destruya a sí misma.

## IX

### e). — *Continuación de los antecedentes históricos.*

Dos palabras más sobre el argumento de los antecedentes históricos.

Sostiene la sentencia que Alberdi, en su proyecto, se refería en forma genérica a "La Autoridad" sin precisar su naturaleza ni su carácter federal o local. Una vez más tengo la poca felicidad de no coincidir con el estudioso magistrado, pues en mi modesta opinión y después de las transcripciones hechas, no queda duda alguna, que Alberdi tomó íntegramente como modelo en esta parte, al P. E. chileno y por consiguiente que se refería a la autoridad federal. Su propia nota del art. 28 disipa hasta la última duda que pudiera subsistir; en esa nota se dice textualmente: "Esta disposición *es tomada* del art. 161 de la Constitución de Chile... Es un ejemplo de imitación recomendado por la experiencia".



Además también, el inciso 1º del art. 70 de su proyecto estatúa entre las atribuciones del Congreso: "Aprobar o desechar las declaraciones de sitio, hechas durante el receso". Así mismo de acuerdo con el inc. 22 del art. 85 del proyecto, atribuciones del P. Ejecutivo, se establecía: "Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Confederación en caso de ataque exterior, por un término limitado y con acuerdo del Senado de las provincias. En caso de conmoción interior, sólo tiene esa facultad cuando el Congreso está en receso, porque *es atribución que corresponde a ese cuerpo*".

Todo ese articulado es bien claro y terminante como para poder afirmar que Alberdi se refería expresamente a la autoridad federal con prescindencia absoluta de los gobiernos provinciales, que no cabían dentro de los antecedentes históricos estudiados, dentro del estado de sitio característico de la unidad de régimen.

## X

### LA GARANTIA JUDICIAL

No habría de ocuparme ni referirme al fallo que se consigna en el considerando undécimo de la sentencia recurrida, por lo mismo que allí se reconoce que en ese fallo, el Alto Tribunal no entró al fondo del asunto que aquí se promueve. Pero en cambio, y de ahí que lo comente brevemente, ese fallo me sirve para demostrar que el amparo judicial a que se refiere esa parte de la sentencia, no constituye ninguna garantía absoluta para *prevenir* los posibles abusos del poder, ni aún siquiera, para corregirlos.

Si V. E. tiene declarado "que en estado de sitio, los ciudadanos y extranjeros pueden ser removidos discrecionalmente, sin que por ello se deban daños y perjuicios por la autoridad nacional o provincial", paréceme difícil que los gobiernos hubieran de detenerse en su aplicación arbitraria, ante el evento de una acción judicial posterior.

## XI

### EL ARTICULO 110 DE LA CONSTITUCION

En rigor de verdad, los argumentos fundamentales de la sentencia apelada son dos: la concurrencia de facultades en el estado de sitio, que si bien no se ha invocado expresamente, se admite tácitamente; y además, el art.



110 de la Constitución Nacional. Habiéndome ocupado ya del primer fundamento, trataré de demostrar ahora, que el art. 110 no puede tener el alcance que se reconoce en el fallo citado.

La sentencia estudia y aplica el art. 110 en su doble aspecto, constitucional y como solución de orden práctico. Trataré pues los dos aspectos, con nuevos argumentos a los ya aducidos en uno y otro orden, en el capítulo X de mi escrito de fojas 1.

a). — *Doctrina constitucional*: Para fijar el alcance constitucional del artículo 110, la sentencia recurrida acepta sin vacilación, una definición de Sarmiento que en su fuente de origen estaba explicada así:

“No se necesita autorización, delegación del Ejecutivo Nacional, que no nombra Gobernadores para hacer cumplir la Constitución ni las leyes federales. La Constitución les ha instituido agentes naturales, *sui jure*, que eso quiere decir natural, propio. Prende los reos de los delitos nacionales y los entrega a los jueces federales, ejecuta sus sentencias, promulga las leyes del Congreso, etc. En los Estados Unidos hay un agente federal, al lado de cada Corte Federal, el Marshall, como si dijéramos el Comandante de los alguaciles o la Gendarmería. En nuestra Constitución, *el gobernador es el empleado nacional ejecutivo*”. (Obras Completas; pág. 26, tomo XXXI).

Luego pues, para Sarmiento, un gobernador de provincia es conjuntamente que el primer mandatario de un estado autónomo provincial, el simple empleado ejecutor de las órdenes nacionales puesto bajo la dependencia administrativa e inmediata del Presidente de la Nación. Si hubiera de juzgarse a Sarmiento a través de esa definición aislada, cabría la mayor decepción sobre aquel paladín de las soberanías provinciales, que se pasó la mayor parte de su vida pública, tronando contra los avances del gobierno central.

Pero bueno es recordar, a manera de explicación, que según fueran las inquietudes de su espíritu combativo, Sarmiento se contradecía con demasiado frecuencia. Comentándose esa disparidad de opiniones, se ha dicho que Sarmiento tenía ideas que eran “miradas como peregrinas”; él mismo las alude en carta dirigida a Don Mariano de Vedia (pág. 144 de la obra citada, tomo XXXI); otras veces se ha dicho también, que según fueran las circunstancias, sostenía doctrinas como gobernador, que luego rectificaba como Presidente, Senador o publicista.

Sea como fuere, lo cierto es que en 1863 daba aquella definición sobre el concepto de “agentes naturales” del



gobierno federal. Pero también es verdad que en la nota dirigida el 25 de Enero de 1872 al gobernador de Buenos Aires por el Dr. Gainza, ministro del Interior de Sarmiento, el ministro siguiendo las "instrucciones" del presidente, como reza la nota, proporcionaba una distinta acepción y alcance del sentido constitucional del art. 110:

"Los derechos del gobernador de Buenos Aires no son inherentes al gobierno provincial, son ejercidos solamente como derechos conferidos por la Constitución Nacional. *Esta no les ha dado autoridad alguna a los agentes del gobierno nacional y sólo pueden cumplir las órdenes que les imparte el Poder Ejecutivo para el cumplimiento de la Constitución Nacional.* Ellos no tienen ingerencia alguna en toda la administración nacional sino cuando especialmente se les encarga o se les dá una comisión especial" (Ob. Citada; pág. 240, tomo XXXI).

Véase pues, como la primitiva definición de Sarmiento que se invoca en el fallo, no puede servir en el sentido que allí se le dá.

## XII

### b). — Fuentes del artículo 110.

Ese artículo o sea el 107 de la Constitución del 53, fué incluido por Alberdi en su proyecto, como una disposición de emergencia, transitoria, en circunstancias angustiosas en que todo debía crearse, en momentos en que el Gobierno Federal recién se organizaba, en una época en que los recursos de la nación, privada de la aduana de Buenos Aires, eran insuficientes para cumplir los propósitos y finalidades de la Constitución Federal.

Ese artículo no proviene ni de la Constitución de los Estados Unidos donde el gobierno federal tiene sus funcionarios especiales en cada Estado, ni de la chilena donde estaba de más, de acuerdo a su sistema unitario de gobierno. Empeñado Alberdi en que el poder central no naufragase por las dificultades propias de toda organización nueva, debió ir muy lejos para encontrar una disposición que transitoriamente salvara esas dificultades. Al decir muy lejos, pretendo decir que debió buscar en una constitución que ninguna influencia tuvo sobre los constituyentes del 53, pues sin querer ofender la memoria de los ilustres convencionales del 1853, es dable suponer que no todos tenían noticias de ella.

Alberdi sacó su artículo de la Constitución de Nueva Granada, artículos 38 y 40, y lo "injertó" en su proyecto de Constitución argentina, como medida circunstancial hasta tanto el gobierno federal pudiera designar todos



sus funcionarios judiciales o administrativos, civiles o militares, para poner en ejercicio la Constitución y las leyes nacionales. Y no podrá argüirseme que expreso aquí mi propia opinión, por el contrario, me remito al mismo Alberdi que calificó al sistema como “régimen de transición” por el que “se irá mediante los años a la consolidación del gobierno nacional argentino”. (Alberdi: Estudios sobre la Constitución Nacional de 1853; capítulo XXII).

De esa manera justificaba su inclusión en el sistema institucional argentino, defendiéndose de paso, de los furibundos ataques de Sarmiento cuando en sus Comentarios (pág. 216), estallaba contra Alberdi, contra los agentes naturales y contra el desdichado art. 107: “¿En qué autoridad, ni en qué principios se fundó el que tan peregrina innovación osó introducir, no ya en la forma, sino en la esencia misma del poder público? ¿Es esto por ventura lo que han dado en llamar gobierno mixto de federal y unitario? ¿O son estas sólo babas con que se han pegado los trozos robados por escribientes o copistas a ésta o a la otra Constitución, desnaturalizándolas todas a un tiempo, por no comprender las bases del poder, ni el mecanismo práctico de esas instituciones?

### XIII

#### c). — Interpretación auténtica del artículo 110.

Falta desgraciadamente, una interpretación judicial definitiva de este artículo en el aspecto que se plantea, pues la existente, a lo que conozco, sólo se refiere a otras cuestiones o a la obligación que tienen las provincias de acatar y facilitar el cumplimiento de las decisiones de los Tribunales Federales. (Zavallía: Jurisprudencia de la Constitución Nacional; tomo II, págs. 480 a 483).

En cuanto a la interpretación que pudiera derivarse de los debates de la Convención Constituyente del 53, se resiente por la falta de noticias concretas. Sin embargo, algo existe, y aún cuando es poco, proyecta alguna luz que permite con el auxilio de debates posteriores, reconstruir en parte el pensamiento de los constituyentes de aquella gran hora argentina.

El acta correspondiente a la sesión del día 30 de Abril de 1853 dice así: “Puesto a discusión el artículo 107 (actual 110), el señor Zapata propuso que se suprimiesen las palabras “y los funcionarios que dependen de ellas”, porque el gobierno federal debía ENTENDERSE única-



mente con los gobernadores y no con sus empleados subalternos, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Confederación". "Después de un ligero debate, en el que tomaron parte los señores Zavala, Gutiérrez, Huergo y Leiva, fué aprobado el artículo con la supresión propuesta por el señor Zapata".

Aunque nada más dice el acta, dignese observar V. E., que ya entonces los constituyentes aceptaban que el cumplimiento de la Constitución y de las leyes nacionales a que alude el artículo 110, debía ser sobre la base del "entendimiento" entre el gobierno nacional y los gobernadores de provincia. Si el espíritu de la convención constituyente hubiere sido de que los gobernadores obraran motu proprio en su carácter de agentes naturales, estaba de más el "entendimiento", esto es, la condición previa de entenderse ambos gobiernos o lo que es lo mismo, arreglar, concertar, convenir el mejor cumplimiento según las instrucciones que debía dar para cada caso el gobierno federal. Si así no hubiera de interpretarse, la palabra "entenderse" dicha expresamente en la sesión, no habría tenido significado alguno en el debate. Tenemos así el primer elemento de interpretación auténtica; veamos ahora el otro.

El Redactor de la Convención Examinadora de la Constitución Federal (1860) al explicar las razones aducidas para suprimir las facultades que se daban al Presidente por el entonces inciso 20 del art. 83, dice así: "Pero en la Confederación Argentina que por *una singularidad especial* donde los agentes naturales del ejecutivo federal son los gobernadores de provincia, la declaración del estado de sitio, queda reducida" a "*dar orden al gobernador de una provincia para que declare en estado de sitio su propio territorio o prenda o destierre un individuo*" (Redactor: N° 4).

Nótese pues, como a pesar de los poquísimos antecedentes que se disponen, ellos son sin embargo suficientes, para interpretar en forma auténtica el pensamiento que presidió en la inclusión de ese artículo, régimen de transición, como decía su mismo creador.

#### XIV

##### a) EL ART. 110 COMO SOLUCION PRACTICA DEL ESTADO DE SITIO.

Paso a tratar ahora el otro aspecto del principal fundamento de la sentencia.

He sostenido con el auxilio poderoso de Alberdi a quien no se puede excluir al estudiar el art. 110, que esa dispo-



sición se incluyó en la Constitución por un motivo circunstancial, hasta tanto el gobierno federal pudiese designar todos los funcionarios civiles y militares para poner en ejercicio los poderes y las facultades que le otorga la Constitución, como también para el mejor cumplimiento de las leyes nacionales.

En la actualidad esas circunstancias no existen; cuando se sanciona una ley nacional, el P. E. se limita a promulgarla y publicarla haciéndola conocer a todos los habitantes por medio de la prensa pública. Oficialmente, por intermedio de comunicaciones que el ministerio del Interior hace llegar a los gobiernos de provincia. El cumplimiento y vigilancia de esas leyes se hace sin intervención de los gobernadores, los que en el mejor de los casos son invitados a facilitar su aplicación.

El gobierno federal dispone en la actualidad de funcionarios, que si no tenía ni podía tener en 1853 por la insuficiencia del erario público y de una organización administrativa preestablecida, tiene en cambio en la hora presente. Sus funcionarios, altos o bajos, constituyen una legión que se distribuyen en todas las provincias argentinas para la aplicación de todas las leyes nacionales: jueces de sección, cámaras de apelación, autoridades militares para el mejor cumplimiento de cualquier ley que directa o indirectamente afecte a las fuerzas armadas del país, funcionarios para aduanas, puertos, correo y telégrafos, obras públicas, percepción y control de toda clase de contribuciones e impuestos, ferro-carriles y transportes, enseñanza superior, secundaria y hasta primaria, ejercicio del culto, colonización, defensa sanitaria humana, animal y agrícola, etc.

Toda esa organización de funcionarios nacionales en el territorio de las provincias constituye la negación del art. 110, que sólo tiene hoy, el valor histórico de algo que enseña a las generaciones presentes, las dificultades que precedieron a la efectiva organización nacional argentina. Artículo que ha caído en desuso por falta de necesidad y que por esa razón todos nuestros estadistas actuales recomiendan su supresión, que bueno es decirlo, muy raramente se ha tenido en cuenta a no ser para criticar la disposición que pretende convertir a los gobernadores de provincia en subalternos del gobierno federal, destruyendo todo el sistema político que tanto empeño se tuvo para organizar y pacificar definitivamente al país.

XV



b). — *Peligros de la teoría de las soluciones prácticas.*

No obstante todo lo dicho hasta aquí, es innegable que en la sentencia recurrida, domina una consideración de orden práctico primando sobre las disposiciones constitucionales.

Para el juzgador, colocado en la situación de que en la Provincia de Buenos Aires la ley del estado de sitio no rinde prácticamente todos los efectos perseguidos, porque en la ausencia de una disposición reglamentaria la Constitución no prevé este conflicto de facultades, ha puesto su mira en el propósito generador de la suspensión de las garantías constitucionales. En realidad, no hay tal conflicto de facultades, y si el conflicto existe, es por la errónea aplicación que han hecho siempre las autoridades provinciales. La Constitución Nacional, como decía el Dr. Bermejo en la cita transcripta antes de ahora, se adapta a todos los casos y organiza todos los poderes y atribuciones, fija los límites a su ejercicio y los medios para que esos límites no sean ultrapasados.

Pero volviendo a la sentencia citada, si bien no dudo de la rectitud ni discuto la libertad de conciencia del magistrado que aplica la ley según su leal entender, pienso sí, ratificando nuevamente el respeto que se merece, que es peligroso para las instituciones del país en la hipótesis de que faltare una disposición reglamentaria, que se sacrifiquen los principios constitucionales consagratorios de las libertades humanas, por la simple y a veces equívoca necesidad práctica de ejercitarlos. Y digo también, de acuerdo a los principios generales del derecho, que si la ley fuese insuficiente, cargue la ley con sus insuficiencias pero nó los individuos.

Nunca será bastante, insistir sobre la peligrosidad de las soluciones prácticas frente a las insuficiencias aparentes de una constitución política. Yo no pretendo decir, ni remotamente, que la sentencia puede conducirnos a extremos pavorosos, porque ni ese es el alcance del fallo, ni ha podido entrar tampoco en la mente del magistrado a quien sé, es un devoto de la democracia. Pero pienso en cambio, que de generalizarse las soluciones prácticas especialmente en las conmociones políticas internas, se llega prontamente a la doctrina de la "necesidad de Estado" que es el abismo donde se ahogan las libertades públicas. Las soluciones prácticas adoptadas como sistema político son las avanzadas de la "necesidad de Estado", que hace



150 años ahogaron en sangre a la Convención, la Revolución y la nación francesa; la misma que en nuestra patria, tuvo por escenario todo el territorio de la República y que epilogó en Caseros.

Además, pretender que por razones de mejor práctica se extendieran los poderes expresamente delegados en manos del Presidente, a los gobernadores de provincia para el mejor ejercicio del estado de sitio, ¿no se llegaría por esos extremos a no cumplir la ley o decreto de estado de sitio?

Si por vía de hipótesis admitiéramos la posibilidad de un gobernador de provincia conspirando abierta o secretamente contra el gobierno federal, ¿es posible admitir que debe dejarse librada a su autoridad el cumplimiento de esas medidas extraordinarias? ¿Hay quien crea que en esa hipótesis, el gobernador de provincia ordenaría la detención de las personas que realmente conspiraran? ¿No resultaría poco práctica la práctica que se quiere incorporar, en ausencia de la reglamentación supletoria que se desea?

Y sin llegar a tal hipótesis, que las enseñanzas de nuestra historia constitucional demuestran que no es tan descabellada ni tan imposible, si solamente supusiéramos que un gobernador de provincia sin tener veleidades de conspirador tampoco le fuera indiferente la caída de un Presidente, si ese gobernador digo, impulsado por sus adversos sentimientos no colaborara con el gobierno central en la aplicación del estado de sitio: ¿el gobierno federal debiera quedar impotente porque su agente natural no hace nada por detener o descubrir conspiradores o revoltosos refugiados en su provincia?

Y como los gobernadores no son enjuiciables ante el Congreso Nacional, como tampoco lo son ante la Justicia Federal (Jurisp. de V. E.: casos de los gobernadores Lucero y Gelabert; tomo 9, pág. 537 y tomo 16 pág. 70) mientras duren en el ejercicio de sus funciones; como sólo pudieran ser sometidos al juicio político local lo que no siempre se realiza y menos en las hipótesis planteadas, el gobernador de provincia supuesto, podría malograr impunemente el estado de sitio. Claro está que queda todavía el remedio heroico de la intervención federal, pero siempre habría la duda de que llegara y sobre todo, que fuera a tiempo.

A tales absurdos puede llevar la teoría de que los gobernadores, por razones prácticas y ecléticas de resolver el ejercicio del estado de sitio, estuvieran investidos de facultades que son privativas del Presidente de la Nación, las que precisamente, por razones prácticas (si hubiera



de admitirse el concepto), no pueden ni deben ser ejercidas sino directamente o por lo menos a requerimiento controlado del gobierno federal.

Una última consideración al respecto: si ha de entenderse que por razones de mejor ejercicio los gobernadores de provincia pueden por sí arrestar, es decir, si tienen la misma facultad que la Constitución Nacional sólo acuerda excepcionalmente al Presidente de la Nación, llegaríamos a reconocerles la conexa de trasladarlos de un punto a otro, dentro o fuera del territorio provincial o nacional, como algunas veces se ha visto en nuestra historia política. Con lo que, pese al artículo 23, los frenos constitucionales del estado de sitio se habrían relajado totalmente.

## XVI

### c). — *La solución está dentro de la Constitución.*

Vengo sosteniendo que el artículo 110 de la Constitución Nacional no puede ser opuesto al 23. Ni la doctrina constitucional — razón suprema — lo autoriza, ni pueden invocarse las causales de orden práctico modificando o derogando disposiciones constitucionales. Y no se diga tampoco que me encierro en un círculo vicioso.

En primer término, que el gobernador de provincia puede indicarle al Ejecutivo Nacional las personas que a su juicio personal deben ser detenidos; o el ejecutivo federal debe solicitar la detención y remisión de las personas que sepa es conveniente hacerlo, sin dejarlo librado al arbitrio, la pasión o la venganza de cualquier policía. El telégrafo, el teléfono y la radiotelegrafía que no existían en el país cuando se sancionó el art. 110 de la Constitución, resuelven el caso en pocos segundos, con lo que desaparece el problema del ejercicio práctico. Repitiendo una vez más, pero aplicándolas, las expresiones ya citadas del Dr. Bermejo: "Su terminología (la de la C. N.) es bastante general para adaptarse a las modalidades de los tiempos y a los adelantos de la civilización".

En segundo lugar y admitiendo la necesidad de reglamentar a las disposiciones constitucionales, hasta tanto el culto de la Constitución sea una religión para gobernantes y gobernados, entonces podría decir, que si el gobierno federal no ha designado todavía los funcionarios nacionales locales que en su nombre, próximos al asiento de las autoridades provinciales, ejerciten sus órdenes, es porque ningún Congreso y ningún Presidente de la Nación se ha preocupado hasta la fecha de arbitrar los me-



dios idóneos y constitucionales para esos fines. Pareciera que sólo la percepción de rentas ha interesado desde el 60 hasta aquí, a los gobiernos federales que se han sucedido.

La Constitución Nacional faculta al Presidente por el art. 86 inc. 10, a designar todos los empleados que le sea necesario y así como los hay por centenares para que se cumplan otras leyes nacionales en el territorio de las provincias, pudo haberse designado a cualquiera de ellos o si se prefiere, uno especial, el "Marshall" que preconizaba Sarmiento.

A su vez el art. 67 inc. 28 faculta al Congreso para "hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes (entre ellos el del inc. 26: estado de sitio) y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina". Tampoco se ha hecho hasta el presente; su falta que no es imputable a los habitantes, no puede ser suplida por soluciones prácticas que se improvisan en cada circunstancia.

Quizá y no obstante la flexibilidad de nuestra Constitución, convenga que de una vez por todas, las autoridades federales dicten las leyes o reglamentos del estado de sitio. Hasta lo considero, no una conveniencia sino una necesidad, cuando frente a estos titubeos constitucionales, recobran toda su actualidad las sentenciosas palabras del ilustre Madison:

"Debe procederse de modo que la ambición contenga a la ambición. El interés del hombre, debe identificarse con los derechos constitucionales de su puesto. Puede importar un reproche contra la naturaleza humana, que sean necesarias tales estratagemas para contener los abusos del gobierno, Pero, ¿qué es el gobierno mismo, sino el mayor de todos los reproches sobre la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernasen a los hombres, no se necesitarían trabas externas ni internas sobre el gobierno. Al formularse un gobierno que ha de administrarse por hombres sobre los hombres, la gran dificultad está en esto: debéis primero habilitar al gobierno para reprimir a los gobernados, y en seguida obligarlo a reprimirse a si mismo. La dependencia del pueblo es, sin duda, la represión primaria sobre el gobierno, pero la experiencia ha demostrado a la humanidad la necesidad de precauciones auxiliares" (El Federalista, pág. 358).

## XVII

### LA INCOMPETENCIA DE JURISDICCION

La sentencia recurrida plantea sin pronunciarse, la incompetencia de jurisdicción, que a mi modo de ver, no se ajusta a derecho.

Las personas detenidas, motivo de este recurso extraordinario, han sido detenidas "per se" por autoridades provinciales cuya facultad para hacerlo ha reconocido la misma sentencia. Por ello pues, entiendo que es de estricta aplicación la reiterada jurisprudencia de V. E. y la de las Excmas. Cámaras Federales. (S. Corte Nacional: tomo 29, pág. 456; tomo 30, pág. 400. C. Federal de La Plata, tomo 8, pág. 59. C. Federal de Buenos Aires. Gaceta del Foro, tomo 66, pág. 155, tomo 55, pág. 32; etc.). Por lo que solicito de V. E. quiera así declararlo.

## XVIII

Pongo fin a este memorial pidiendo a V. E. se digne excusar su extensión que sólo intento justificar, repitiendo lo que ya expresara en mi escrito de fjs. 1: Si excede a lo que es de práctica en el procedimiento, nunca será mucho ni bastante cuando lleva enhiesta en su asta, la bandera de las libertades humanas.

Enseña la Historia Constitucional de Inglaterra que en el año 1638, bajo el reinado de Carlos I un miembro de la nobleza provinciana, John Hampden, no vaciló en emprender el penoso camino de una contienda judicial para reclamar de la exigua cantidad de 20 chelines que le imponía la Corona como contribución extraordinaria para armar buques de guerra. En realidad no le interesaba a aquel ciudadano inglés esa suma insignificante: lo que Hampden entró a discutir fué la facultad de la Corona para imponer contribuciones no votadas por el Parlamento. Se discutía así uno de los derechos seculares del pueblo inglés. El juicio que fué largo y accidentado, conmovió a todo el reino, el pleito lo ganó el Rey, pero la monarquía recibió un golpe fatal.

Al evocar ese episodio histórico no pretendo equiparar los casos, pues bien sé que la Suprema Corte de Justicia no es ni ha sido lo que fué el Tribunal del Tesoro ni la Cámara Estrellada de Inglaterra, pero la evocación me sirve sí, para decir a V. E.: al emprender este camino que me conceden las leyes de mi país, no he venido a





ganar o perder un pleito, no he llegado tan sólo para obtener la libertad de algunas personas, sino que vengo en la medida de mis escasas fuerzas, a izar bien alto la bandera de nuestra Constitución Nacional, para que sus principios democráticos sean algo más que letra vana, para que sus principios sean la eterna verdad de nuestro pueblo.

Vengo en fin, a pedir al supremo intérprete de la Carta política más generosa y humana de la tierra, quiera convertir una vez más sus elevados estrados en sabia y desapasionada cátedra, para que en luminoso fallo puedan abreviar su sed institucional gobernantes y gobernados, los que en las grandes convulsiones de su vida política necesitan imperiosamente de la voz autorizada que les recuerde por vía de mandato, que estos pueblos cediendo un poco de sus libertades innatas crearon para su mejor felicidad a los gobiernos, pero que los gobiernos por más virtuosos que fueran, no son ni los creadores ni los dispensadores de las libertades argentinas.

Por las razones expuestas, por las ya aducidas anteriormente, pido respetuosamente a V. E. se sirva revocar la sentencia apelada, ordenando por quien corresponda, la inmediata libertad de las personas nombradas.

Es justicia.

*Luis R. Longhi.*

Buenos Aires, Marzo 9 de 1933.

